



**AMPARO EN REVISIÓN NÚMERO 487/2001.  
QUEJOSO: ENRIQUE EMILIO MARCOS  
GIACOMÁN.**

**PONENTE: MINISTRO SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.  
SECRETARIO: EDUARDO FERRER MAC-GREGOR POISOT.**

Vo. Bo.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la  
Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día  
*dieciocho de octubre del año dos mil dos.*

**VISTOS; y,  
RESULTANDO:**

Cotejó:

**PRIMERO.-** Mediante escrito presentado el diez de febrero  
de dos mil, en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de  
Distrito en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey,  
Enrique Emilio Marcos Giacomán, solicitó el amparo y la  
protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y  
por los actos que a continuación se indican:

**"a).- Del Congreso de la Unión:--- 1.-La  
aprobación y expedición del Decreto Legislativo de  
fecha 31 de diciembre de 1999, Decreto mediante el  
cual se modifican diversas leyes fiscales y otros  
ordenamientos federales publicados en el Diario  
Oficial de la Federación, el 31 de diciembre de  
1999, con relación al artículo 90 fracción VI  
segundo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la  
Renta, que textualmente establece:--- ARTÍCULO**

**90.- Las personas que obtengan ingresos por los conceptos a que se refiere este Capítulo, podrán efectuar las siguientes deducciones:** (reproduce la fracción VI).--- **Este precepto que se reclama mediante el presente escrito, se debe correlacionar con la siguiente tesis jurisprudencial, con el fin de que no se entienda que ha existido un consentimiento tácito del artículo materia de esta solicitud de amparo, porque aun cuando el suscrito se hubiere sometido a las disposiciones contempladas por una ley, ello de ninguna manera puede implicar que las nuevas normas resulten derivadas de aquéllas que fueron consentidas, y que, desde el punto de vista formal y material, son actos legislativos distintos.**--- **Tesis 'LEYES, AMPARO CONTRA. CUANDO SE REFORMA UNA LEY DECLARADA INCONSTITUCIONAL O SE SUSTITUYE POR UNA CONTENIDO SIMILAR O IGUAL, PROCEDE UN NUEVO JUICIO POR TRATARSE DE UN ACTO LEGISLATIVO DISTINTO.'** **Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tribunal Pleno, jurisprudencia P/J 89/97, Volumen VI, página 10, Primera Parte, Diciembre de 1997. (La transcribe).**--- **Así como, lo establecido por los artículos 1°. A. fracción II y 32 fracción III, último párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que textualmente establece:--- Artículo 1°. A.- Están obligados a efectuar retención del impuesto que se le traslade, a los contribuyentes que**

60



se ubiquen en algunos de los siguientes supuestos:

(Transcribe el inciso a), de la fracción II).--- **Artículo 32**

**fracción III, último párrafo.**- (Lo transcribe).--- **2.- La**

**aprobación y expedición del Decreto Legislativo de**

**fecha 31 de diciembre de 1999, Decreto mediante el**

**cual se modifican diversas leyes fiscales y otros**

**ordenamientos federales publicados en el Diario**

**Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de**

**1999, con relación que contiene la Ley de Ingresos**

**de la Federación en especial por lo referente a la**

**Ley del Impuesto sobre la Renta y Ley del Impuesto**

**al Valor Agregado.**--- b) Del C. Presidente

**Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,**

**reclamo:**--- 1° La expedición del Decreto

**Promulgatorio de fecha 31 de diciembre de 1999,**

**Decreto mediante el cual se modifican diversas**

**leyes fiscales (entre ellas la Ley de Ingresos y la**

**Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto**

**al Valor Agregado) y otros ordenamientos federales**

**publicados en el Diario Oficial de la Federación del**

**día 31 de diciembre de 1999, con relación al artículo**

**90, fracción VI, segundo párrafo, de la Ley del**

**Impuesto sobre la Renta, así como, lo establecido**

**por los artículos 1°. A, fracción II y 32 fracción III,**

**último párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor**

**Agregado.**--- c) Del C. Secretario de la Secretaría de

**Gobernación, reclamo:**--- 1° El refrendo del Decreto

**Promulgatorio de fecha 31 de diciembre de 1999,**

**Decreto mediante el cual se modifican diversas**

*leyes fiscales (entre ellas la Ley de Ingresos y la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado) y otros ordenamientos federales publicados en el Diario Oficial de la Federación del día 31 de diciembre de 1999, con relación al artículo 90, fracción VI, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como, lo establecido por los artículos 1º.A, fracción II y 32 fracción III, último párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.---* d).- Del C. Secretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reclamo:--- 1º.- La aplicación en perjuicio del quejoso del Decreto Legislativo y Promulgatorio que se combate por inconstitucional, consistente en todos los actos tendientes a la determinación y cobro del impuesto sobre la renta.--- 2.- Las consecuencias en perjuicio del quejoso, que se deriven de la no retención del impuesto al valor agregado y la no inclusión dentro de los comprobantes que expida de la leyenda 'Impuesto retenido de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor Agregado.' e).- Del C. Director del Diario Oficial de la Federación, del Gobierno Federal, reclamo:--- 1º. La publicación del 31 de diciembre de 1999 en dicho Órgano Oficial, de los decretos Legislativos, y Promulgatorio a que me referí anteriormente.--- 2º. La publicación en el Diario Oficial de la Federación, del Gobierno Federal, 31 de diciembre de 1999, referente a las modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la

61



Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.--- f).- El C. Presidente del Sistema de Administración Tributario... --- g).- De la Administración General de Auditoría Fiscal Federal... --- h).- De la Administración Local de Auditoría Fiscal Federal en Monterrey... --- i).- Del C. Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado de Nuevo León... --- j).- Del C. Director General de Auditoría Fiscal, de la Secretaría de Finanzas del Estado de Nuevo León, reclamó:--- 1º.- La aplicación en perjuicio de la quejosa del Decreto Legislativo y Promulgatorio que se combate por inconstitucional, consistente en todos los actos tendientes a la determinación y cobro del impuesto sobre la renta.--- Las consecuencias en perjuicio del quejoso, que se deriven de la no retención del impuesto al valor agregado y la no inclusión dentro de los comprobantes que expida de la leyenda 'Impuesto retenido de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor Agregado.' "

La parte quejosa expresó como antecedentes del caso, los que a continuación se transcriben:

"1º.- El suscrito es propietario de varios inmuebles, mismos que arrienda a diferentes personas morales y como consecuencia de ello me encuentro tributando en el impuesto sobre la renta Título IV, Capítulo III, de los ingresos por

arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de inmuebles, asimismo, derivado de dichos ingresos soy contribuyente del impuesto al valor agregado. Mi situación jurídica y fiscal la justifico con copia certificada de las escrituras correspondientes, contratos de arrendamiento, cédula fiscal y última declaración provisional del ejercicio fiscal de 1999, presentada ante la autoridad competente. Documentación que se presenta con el fin de justificar el interés jurídico del quejoso en la interposición de la presente demanda.---

2°.- El 31 de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, los Decretos Legislativos y Promulgatorio, mismos que fueron refrendados por el Secretario de Gobernación, mediante el cual se modifican diversas leyes fiscales y otros ordenamientos federales, acto legislativo que tiene relación con lo dispuesto en el artículo 90, fracción VI, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como lo establecido por el artículo 1°-A, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Normas jurídicas, que entraron en vigor el día primero de enero de 2000.---

3°.- La quejosa no está de acuerdo con lo establecido en el artículo 90, fracción VI, segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ni con lo establecido en los artículos 1°- A, fracción II y 32, fracción III, último párrafo, de la Ley del

UPREMA  
TIC  
J G  
CIET.



62

**Impuesto al Valor Agregado, contenidos en el decreto mencionado en el párrafo anterior, pues a juicio del suscrito, me causa menoscabo en mis bienes y derechos jurídicamente tutelados por nuestra Ley Suprema, en vista de que viola de manera flagrante lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV, constitucional, así como las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 1º, 13, 14 y 16 de la misma Constitución".**

**SEGUNDO.-** El quejoso estimó violadas en su perjuicio las garantías establecidas en los artículos 1º, 13, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los siguientes conceptos de violación:

**"Único.- Los artículos 90, fracción VI, párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 1º-A fracción II y último párrafo, 32, fracción III, último párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 22 del Código Fiscal de la Federación, violan en perjuicio de la quejosa la garantía de equidad, consagrada en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Porque dichos tributos no se ajustan a dicha garantía.--- El precepto antes citado, establece: (lo reproduce). De lo anterior, se desprenden básicamente tres garantías individuales que todo gobernado tiene derecho, a que se le respeten en materia impositiva, a saber:---**

a) *Garantía de proporcionalidad.*--- b) *Garantía de equidad, y.*--- c) *Garantía de legalidad.*--- *Cualquier tributo que carezca de alguno de estos requisitos, necesariamente será contrario a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el constituyente concedió al legislador facultades para establecer tributos pero también lo limitó a respetar estas garantías.*--- *La doctrina, la legislación y la jurisprudencia son acordes en señalar que la equidad tributaria se traduce en la igualdad del sujeto pasivo ante la ley.*-- *'El elemento equidad mira fundamentalmente a la generalidad de la obligación. En estos términos, cuando la ley no es general, por sólo ello es inequitativa'. Así lo sostuvo el entonces Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Rivera Pérez Campos, en la Revista de Investigación Fiscal publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, correspondiente al mes de marzo de 1970, página 78.*--- *Lo anterior nos lleva a concluir que las leyes impositivas deben ir dirigidas a una pluralidad innominada de sujetos, es decir, a todos aquéllos que realicen en algún momento, los correspondientes supuestos normativos para que surja el hecho generador del tributo. De no cumplir lo anterior estamos en presencia de un impuesto inequitativo y, por ende, violatorio de garantías individuales.*--- *Las normas jurídicas de la Ley del Impuesto sobre la Renta que*

63



nos ocupa en la presente demanda de garantías y las normas jurídicas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, contenidas en la Ley de Ingresos de la Federación, discriminan a sujetos que cuentan con la misma fuente de riqueza o que se encuentran en la misma hipótesis normativa, es decir, por lo establecido en los artículos: 90 fracción VI, segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y 1ª, fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que ahora se impugna por inconstitucional, violan en perjuicio de la quejosa la garantía de equidad, por establecer diferentes hipótesis de determinación de la base gravable, a sujetos pasivos de la obligación tributaria, que tienen el mismo objeto del impuesto (ingresos por arrendamiento). Y en materia de Impuesto al Valor Agregado, establece un sistema de traslado (artículo 1º), y acreditamiento (artículo 1º), del impuesto con el fin de determinar una base de impuesto a enterar a la autoridad competente, sin embargo, para el caso del suscrito por el tipo de ingresos que percibe, se le prohíbe determinar la base del impuesto en esa medida, al retenerle dicho impuesto. En el caso de otro tipo de sujetos que realizan actividades, objeto de este impuesto, sí lo podrán ejercer, sin que a los mismos siempre les resulte saldo a favor que concatenado a lo establecido por el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, es inconveniente y problemático

DE  
CON,  
LA  
OC

*para el suscrito ejercer esos saldos a favor, por las condiciones o requisitos particulares que dicho ordenamiento establece.--- A).- El impuesto sobre la renta que se impugna en esta demanda de garantías grava los ingresos (objeto del impuesto) que se perciban por permitir el uso o goce temporal de inmuebles. Asimismo, la base del impuesto en cuestión lo constituye: el ingreso menos las deducciones autorizadas. Deducciones que se encuentran establecidas en cada una de las fracciones que integran el artículo 90 de dicha Ley impositiva, sin embargo, el segundo párrafo de la fracción VI, establece que el contribuyente en lugar de deducir los gastos a que se refieren las seis fracciones del artículo 90, podrá optar si el inmueble lo otorga para casa habitación, deducir el 50 por ciento de sus ingresos en substitución de las deducciones a que este artículo se refiere. En los demás casos se podrá optar por deducir el 35 por ciento en substitución de las deducciones a que este artículo se refiere.--- Ejemplo:--- a).- Si el suscrito arrienda un inmueble y el arrendatario lo destina para casa habitación y obtiene un ingreso anual por arrendamiento de \$100,000.00, tiene derecho a deducir el 50% de sus ingresos o sea la cantidad de \$50,000.00 teniendo como base un monto de \$50,000.00 y sobre esta base se aplica la tarifa del artículo 141 de dicho ordenamiento fiscal.--- b).- Si el suscrito arrienda el mismo*



inmueble y el arrendatario lo destina para otro uso diferente a casa habitación y obtiene un ingreso anual por arrendamiento de \$100,000.00, tiene derecho a deducir el 35% de sus ingresos o sea la cantidad de \$35,000.00, teniendo como base un monto de \$65,000.00 y sobre esta base se aplica la tarifa del artículo 141 de dicho ordenamiento fiscal.--- Como se puede observar a una misma fuente de riqueza (arrendamiento de inmueble) se le ubica en bases diferentes de tributación, máxime que el propietario no le da destino diferente al inmueble sino quien se lo da es el arrendatario. Por lo que el obligar al suscrito a ~~que~~ para determinar la base gravable utilice el porcentaje del 35% en lugar del 50%, estaría dando al suscrito un tratamiento desigual con relación a otro contribuyente cuando ambos estamos en un mismo plano de igualdad al arrendar inmuebles, por lo que el aplicar el suscrito dicha tasa del 35% en lugar del 50%, hace que la norma sea violatoria del artículo 31, fracción IV, de nuestra Carta Magna, en virtud de que ~~los~~ sujetos por el mismo tipo de ingresos no se nos pone en un plano de igualdad ante la ley, razón por la cual dicho precepto legal no cumple con la garantía de equidad que todo tributo debe contener para que se considere constitucional, además, dicha norma viola también lo establecido por el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al convertirse en una

*ley privativa, por las razones antes expuestas.--- Es preciso recordar en este momento, que el objeto del impuesto, como ya se mencionó, lo constituye el ingreso por arrendamiento de inmuebles y consecuentemente los contribuyentes de ese gravamen deberán tener el mismo objeto, la misma base y la misma tarifa o tasa sin importar que las personas que arriende dichos inmuebles los destine para casa habitación o para otros usos, máxime que quien le da el uso y destino al inmueble es el arrendatario, persona que no es sujeto ni activo ni pasivo de la relación jurídico tributaria, derivada de los ingresos por arrendamiento. Por lo tanto, es inequitativo que el suscrito tenga que deducir el 35% de los ingresos en lugar del 50% que debe ser la regla general, por lo que ese tratamiento desigual en la base del impuesto sobre la renta hace que el mismo se aleje totalmente del principio de equidad del impuesto y ello trae una violación en perjuicio del suscrito, de la garantía de equidad contenida en la fracción IV del artículo 31 constitucional, a favor de los contribuyentes, en virtud de que la igualdad debe existir respecto a todos los contribuyentes que obtengan el mismo tipo de ingresos, por lo que la base, tasa y tarifa deben ser iguales.--- Es aplicable al caso los siguientes criterios judiciales que ha adoptado por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación:--- Tesis 'RENTA, IMPUESTOS SOBRE LA.*



NO PUEDEN CONSIDERARSE PORCENTAJES DIFERENTES LOS INGRESOS PROVENIENTES DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DESTINADOS A CASA HABITACIÓN Y LOS QUE PROVIENEN RESPECTO DE AQUÉLLOS QUE NO SE DESTINAN A ESE FIN. (La transcribe).--- **B).- Con relación al**

**impuesto al valor agregado, tenemos los siguientes elementos de dicho tributo:--- Objeto:--- ARTÍCULO**

**1.- Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta ley, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes:--- I.-**

**Enajenen bienes.--- II.- Presten servicios independientes.--- III.- Otrorguen el uso o goce temporal de bienes.--- IV.- Importen bienes o servicios.--- Tasa:--- El impuesto se calculará**

**aplicando a los valores que señala esta ley, la tasa del 15%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores.--- El contribuyente trasladará dicho**

**impuesto, en forma expresa y por separado, a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente, o reciban los servicios. Se entenderá por traslado del impuesto el cobro o**

**cargo que el contribuyente debe hacer a dichas personas de un monto equivalente al impuesto establecido en esta ley.--- Base:--- El contribuyente**

**pagará en las oficinas autorizadas la diferencia entre el impuesto a su cargo y el que le hubieran**

*trasladado o el que hubiese pagado en la importación de bienes o servicios, siempre que sean acreditables en los términos de esta ley.---*

*Artículo 1°- A. Están obligados a efectuar retención del impuesto que se le traslade, los contribuyentes que se ubiquen en algunos de los siguientes supuestos:---* (Reproduce la fracción II, inciso a).---

*Artículo 32, fracción III, último párrafo.-* (lo reproduce).--- *De los anteriores elementos de los impuestos, tenemos que el suscrito al determinar la base (la diferencia entre el impuesto a su cargo y el que le hubieran trasladado), siempre le resultará saldo a favor en virtud de que lo establecido por el artículo 1°. A, rompe con la mecánica de determinación de la base gravable, en virtud de que esa diferencia siempre será negativa y nunca tendrá diferencia que liquidar ante la autoridad competente, en razón de que el impuesto a cargo y que traslade al arrendatario, sólo matemáticamente lo expresó en la declaración de pago al momento de determinar la base, pero nunca podrá acreditarlo en los términos del artículo 4° de la ley en comento, como lo haría cualquier otro contribuyente al que no se le retenga el impuesto que traslada, consecuentemente, el artículo 1°-A, que obliga a la retención del impuesto cuando se trate de otorgamiento del uso de inmuebles, pone al suscrito en un plano de desigualdad ante otros contribuyentes del impuesto al valor agregado, en*



virtud de que los elementos del impuesto, objeto, base y tasa, así como el procedimiento de acreditación del impuesto se encuentra dentro del capítulo I de disposiciones generales que aplica a cualquier actividad que se encuentra dentro del objeto del impuesto, y a quienes no se le impone la retención de dicho impuesto. Aunado a lo anterior, tenemos que el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, establece la obligación de garantizar la devolución que se solicita, por un monto igual al de la devolución del impuesto de que se trata, por un plazo de seis meses.--- Ejemplo:--- En el primer trimestre el suscrito realizó actividades por un monto de \$100,000.00 y por disposición de ley trasladó la cantidad de \$15,000.00, por concepto de impuesto al valor agregado, impuesto que le fue retenido, por lo que no obtuvo ninguna cantidad de efectivo por dicho impuesto que trasladó. Durante el mismo trimestre, adquirió bienes y servicios, por un monto de \$20,000.00, consecuentemente la trasladaron y pagó de su patrimonio la cantidad de \$3,000.00 por concepto de impuesto al valor agregado.--- Determinación de la base del impuesto correspondiente a dicho trimestre.--- La determinación consiste en pagar la diferencia entre el impuesto a su cargo (trasladado y retenido) y el que le hubieran trasladado (el que pagó con su propio patrimonio). 15,000.00, menos 3,000.00, base del impuesto 12,000.00, menos impuesto retenido

15,000.00 impuesto a pagar 3,000.00, cantidad que queda a favor del suscrito por no poder determinar la base y pagar sólo la diferencia a su cargo como sucede con los demás contribuyentes del impuesto en comento.--- Por otro lado tenemos que ese saldo a favor puede ser solicitado en los términos y con los requisitos a que se refiere el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación y tenemos lo siguiente:--- 1.- Para cumplir con los requisitos a que se refiere el artículo 22 antes mencionado, necesito pagar por la elaboración de la solicitud de devolución. Suponiendo que el contador que llene el formulario correspondiente y tramite dicha devolución, me cobre la módica cantidad de \$1,500.00.--- 2.- Como debo garantizar mediante depósito de dinero en las instituciones de crédito autorizadas para tal efecto, por un plazo de seis meses, una cantidad igual a la solicitada, y tramito un crédito por dicha cantidad, tendré un gasto adicional por concepto de intereses de \$900.00.--- 3.- Lo anterior implica que para poder tener derecho a recuperar el impuesto que me fue trasladado, tendré que gastar la cantidad de \$2,400.00, para que me quede un remanente de \$600.00, cuando si se me diera un trato igual que a los demás contribuyentes de este impuesto, el suscrito sin tantos problemas recibiría el impuesto que le fue trasladado al 100% (3,000.00), y no que, por una disposición que incluso rompe con los

CDP  
EST  
LE  
FGR



fines de este impuesto y su mecánica, como lo es el Artículo 1º-A, que ahora se ataca de inconstitucional, solo obtendré \$600.00.--- De lo anteriormente expuesto, al legislador se le olvidó, tomar en cuenta que la equidad, es la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravados, deducciones permitidas, base del impuesto, etc., debiendo variar únicamente las tarifas tributarias aplicables de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente para respetar el principio de proporcionalidad, en los casos de impuestos directos, y en el caso del impuesto que se estudia debe ser una misma tasa por tratarse de un impuesto al consumo.--- Ahora bien, si los preceptos especificados no cumplen con los anteriores requisitos, propicia que los contribuyentes que se encuentren en la misma situación jurídica frente a la ley sean colocados en situación desigual, pues mientras los que pueden acreditar y deducir del pago del impuesto no verán afectado su patrimonio, porque no se les retiene, por estar excluidos del artículo 1º-A, sin embargo, los que se encuentran dentro de las hipótesis de dicha norma, sí verán afectado su patrimonio y no tendrán derecho a ejercer todos los derechos que

*la ley establece para los contribuyentes a quienes no se les retiene, atentándose contra la equidad en los tributos y los fines del impuesto al valor agregado. En otro orden de ideas, la equidad exige que se respete el principio de igualdad; determinando que es norma de equidad las que se encuentren obligadas a determinada situación, los que se hallen dentro de lo establecido por la ley y que no se encuentren en esa misma obligación, los que están en situación jurídica diferente; o sea, tratar a los iguales de manera igual y a los desiguales de manera desigual.--- Son aplicables las tesis números 84 y 86 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas a fojas 885 y 887, respectivamente, del informe de 1988, que establecen el siguiente tenor literal:---*

*84.- 'VALOR AGREGADO, ARTÍCULO 6° DE LA LEY DEL IMPUESTO AL, MODIFICADO POR LA LEY QUE ESTABLECE, REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES FISCALES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 31 DE DICIEMBRE DE 1986. ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.- (La transcribe).---*

*86.- 'VALOR AGREGADO. DEVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS SALDOS A SU FAVOR OTORGADA SÓLO A DETERMINADOS CONTRIBUYENTES. QUEBRANTA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD. (ARTÍCULO 6° DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.*



VIGENTE A PARTIR DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE). (La transcribe). '--- Sin que lo anterior signifique, como con error lo estima la autoridad recurrente, que todos los contribuyentes sin excepción están incluidos en la tasa del 0%, porque la propia Ley del Impuesto al Valor Agregado de referencia, en sus artículos 1°, 2°, 2°-A, 2°-B, 2°-C, 9°, 29 y 30, clasifica los distintos causantes de dicho gravamen, asignándoles la tasa del 0%, 6%, 10%, 15% y 20%, según les corresponda de acuerdo a las categorías en que se encuentren ubicados para efectos de tributación, que como ya se vio, la tasa impositiva en que estén ubicados, no es distintiva para los contribuyentes cuando se trate de la devolución de los saldos a su favor.--- Son aplicables a los casos planteados por la Ley del Impuesto sobre la Renta, como del Impuesto al Valor Agregado, los siguientes criterios jurídicos, sustentados por el Poder Judicial Federal, criterios que los hago míos para robustecer el único concepto de violación referido en la presente demanda de garantías.--- Tesis 'EQUIDAD TRIBUTARIA. LA TRANSGRESIÓN DE ESTE PRINCIPIO NO REQUIERE COMO PRESUPUESTO QUE SE ESTABLEZCAN DIVERSAS CATEGORÍAS DE CONTRIBUYENTES. (La transcribe). '--- Tesis: 'EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO

*IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES. (La transcribe). '--- 'IMPUESTOS.- INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS. NO ÚNICAMENTE LO SON PORQUE PRODUZCAN LA RUINA ECONÓMICA DEL CAUSANTE.- (La transcribe). ' "*

**TERCERO.-** Por acuerdo de catorce de febrero de dos mil, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Nuevo León, a quien por turno correspondió conocer del asunto, admitió la demanda radicándola bajo el número 152/2000; y seguidos los trámites legales, dictó sentencia, la que terminó de engrosar el veintiocho de septiembre del mismo año, y que concluyó con el siguiente punto resolutivo:

***"ÚNICO: Se SOBRESEE en este juicio de amparo número V-152/2000 promovido por ENRIQUE EMILIO MARCOS GIACOMÁN por los actos y autoridades que quedaron precisados en el resultando primero de esta resolución."***

Las consideraciones en que se apoyó el Juez de Distrito para resolver en este sentido son las siguientes:

***"Segundo: Las autoridades responsables Secretario de Hacienda y Crédito Público, Presidente del Servicio de Administración Tributaria, Administrador General de Auditoría Fiscal Federal, residentes en México, Distrito***



Federal; Administrador Local de Auditoría Fiscal en Monterrey, Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado de Nuevo León, y Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, a quienes se les reclama la aplicación de las reformas de la Ley del Impuesto sobre la Renta y Ley del Valor Agregado, publicadas en el Decreto de fecha treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia del acto reclamado, sin que dicha negativa se encuentre desvirtuada en autos, por lo que procede sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo.- Tercero: La existencia de los actos legislativos quedó acreditada con los informes rendidos por el Procurador Fiscal de la Federación, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Congreso de la Unión, Secretario de Gobernación y Director del Periódico Oficial, residentes en México, Distrito Federal.--- Al respecto, el Procurador Fiscal de la Federación, en representación del Presidente Constitucional manifiesta, entre otras cosas, que si bien es cierto que se expidió el Decreto Promulgatorio de fecha treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, mediante el cual se modifican diversas leyes fiscales; empero, hace la aclaración

que en dicho Decreto no se reforman, adicionan o derogan, en forma alguna, el artículo 90, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ni tampoco lo previsto por los diversos artículos 1º-A, fracción II y 32, fracción III, último párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.--- Cuarto: Las causales de improcedencia que aparezcan en el juicio o que se hagan valer por las partes, deben estudiarse preferentemente a cualquier otra cuestión en términos del artículo 73, última parte, de la Ley de Amparo.--- En el presente caso, el Presidente de la República, a través del Procurador Fiscal de la Federación, hace valer la causal de improcedencia contenida en las fracciones V y VI del artículo 73 de la Ley de Amparo.- En la especie, resulta fundada la causal de improcedencia a que se refiere la fracción V del numeral en comento, en atención a las siguientes consideraciones: El artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, establece: (Se transcribe).--- Luego, el peticionario de amparo deberá acreditar que el acto reclamado le transgrede un derecho público subjetivo lesionando directamente sus intereses jurídicos, en su persona, bienes, posesiones o derechos y es entonces cuando nace la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías.--- Asimismo y para efectos de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación define el concepto de perjuicio como la ofensa que se hace a



los derechos o intereses de una persona.--- Ahora bien, en el caso a estudio, no obstante que las autoridades responsables Presidente de la República, Congreso de la Unión, Secretario de Gobernación y Director del Periódico Oficial, al rendir sus respectivos informes justificados, admitieron los actos a ellos reclamados; sin embargo, la quejosa debe acreditar que se afecta su esfera jurídica, situación que en el presente caso no sucede, pues no se demostró la presencia del perjuicio o daño individual concreto y directo ocasionado por el acto reclamado, requisito indispensable para la procedencia del juicio de garantías.--- Lo anterior es así, porque la impetrante reclama la discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación de la Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve; y al respecto, como lo hace ver la autoridad responsable, Presidente de la República, a través del Procurador Fiscal de la Federación, en el Decreto Promulgatorio de fecha treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, efectivamente se modifican diversas leyes fiscales, pero en éstas no se contienen las que reforman, adicionan o derogan, en forma alguna, el artículo

90, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ni tampoco lo previsto por los diversos artículo 1º-A, fracción II y 32, fracción III, último párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, como lo señala la quejosa en su escrito de demanda de garantías.--- De ahí que resulte incuestionable que el acto de autoridad no causa perjuicio actual y consecuentemente, no se ve satisfecho el requisito de procedibilidad derivado del artículo 4º de la Ley de Amparo, pues para que sea evidente el interés jurídico del gobernado, es menester que la quejosa esté colocada en los supuestos de la norma o a partir de la aplicación de la misma; por tanto, si el Decreto que tilda de inconstitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, no contiene la entrada en vigor de las reformas de las Ley del Impuesto sobre la Renta y Ley del Valor Agregado, es concluyente que ningún perjuicio puede causarle.--- Lo anterior encuentra apoyo en las tesis de jurisprudencia que se publican en el CD IUS 8, que edita la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: 109-114 Primera Parte. Página 191.--- 'INTERÉS JURÍDICO, COMPROBACIÓN DEL. (Se transcribe)'.--- Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación.



**Tomo: 193-198 Primera Parte. Página 188.---**

**'INTERÉS JURÍDICO NECESIDAD DE ACREDITARLO EN EL AMPARO CONTRA LEYES.'**

**(Se transcribe).--- Y por analogía, la siguiente:**

**Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**

**Tomo: II, Diciembre de 1995. Tesis: 2ª./J. 81/95.**

**Página 289.--- 'AMPARO CONTRA LEYES VACATIO LEGIS CARENCIA DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR UNA LEY DURANTE ESE PERÍODO.**

**(Se transcribe).--- Consecuentemente, al resultar**

**procedente la causal analizada, se hace innecesario**

**el estudio de la diversa causal de improcedencia**

**aducida por la responsable, contenida en la**

**fracción VI del artículo 73, del numeral en cita,**

**atento a la tesis de jurisprudencia publicada en el**

**CD IUS 8, que dice: Novena Época. Instancia:**

**Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la**

**Federación y su Gaceta. Tomo: 2./J.54/98, Página**

**414.--- 'SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE**

**UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. (Se**

**transcribe).--- En las relacionadas consideraciones,**

**ante la falta de comprobación de la afectación de**

**los intereses jurídicos de la quejosa, se actualiza la**

**causal de improcedencia prevista en el artículo 73,**

**fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que resulta**

**procedente decretar el sobreseimiento en el juicio,**

**con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74,**

**fracción III, del ordenamiento legal invocado."**

**CUARTO.-** Inconforme con la anterior determinación el quejoso interpuso en su contra recurso de revisión, y como agravio único expresó lo siguiente:

**"Único:- Fuente del agravio:** Lo es el considerando cuarto y el resolutivo único del auto de sobreseimiento de fecha 28 de septiembre del 2000.--- **Preceptos violados** lo son los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación a los artículos 90, fracción VI, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 1ºA, fracción II y 32, fracción III, último párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, consecuentemente no tienen aplicación los criterios jurídicos sustentados por nuestro más Alto Tribunal Judicial.--- **Conceptos y fundamentos del agravio.-** El Juez Primero de Distrito hace una inexacta consideración e interpretación del acto reclamado y de lo estatuido por los artículos 90, fracción VI, segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 1ºA, fracción II y 32, fracción II, último párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, artículo 73, fracción V y de la tesis denominada 'LEYES, AMPARO CONTRA. CUANDO SE REFORMA UNA LEY DECLARADA INCONSTITUCIONAL O SE SUSTITUYE POR UNA DE CONTENIDO SIMILAR O IGUAL, PROCEDE UN NUEVO JUICIO POR TRATARSE DE UN ACTO.



LEGISLATIVO DISTINTO', *Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tribunal Pleno, jurisprudencia P./J. 89/97, Volumen VI, página 10, Primera Parte, Diciembre de 1997, que se plasma en el escrito de amparo; al establecer que el presente juicio de amparo es improcedente por los siguientes motivos y fundamentos:* (transcribe la parte conducente del cuarto considerando de la sentencia recurrida).--- *Lo anterior evidencia una inexacta apreciación del acto reclamado y una indebida motivación y fundamentación del mismo, por las siguientes razones:--- 1.- Lo dispuesto en el artículo 22, fracción I, de la Ley invocada, permite concluir que una ley puede ser reclamada en la vía de amparo como autoaplicativa, si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular y es el caso de que los artículos 90, fracción VI, último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 1ºA, fracción II y último párrafo (sic), 32, fracción III, último párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; el suscrito debe aplicarlo el primero de ellos ante el primer acto de aplicación que será cuando realice el primer pago provisional, sin necesidad de que exista un acto de aplicación de la ley, pues como lo establece el artículo 6, párrafo tercero, del Código Fiscal de la Federación, establece: 'Corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo' y el artículo 92 de la Ley de Impuesto sobre la Renta*

**establece:** 'Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este capítulo, efectuarán pagos provisionales trimestrales a cuenta del impuesto anual a más tardar los días 17 de los meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente año.'--- **Los artículos 1º.A.** (Transcribe la fracción II, inciso a)).--- **32, fracción II, último párrafo:** (lo reproduce), **estos dos artículos son de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación que le da al bien a quien arriendo debe hacer la retención correspondiente (sic), lo anterior transcrito le da a ambos cuerpos normativos, de los que ahora me duelo, el carácter de leyes autoaplicativas.**--- **2.- De acuerdo a la documentación presentada por el suscrito, conjuntamente con la demanda de amparo, misma que consistió en:** I).- Escrituras de propiedad de los inmuebles que arriendo; II).- Contratos de arrendamiento celebrados entre la suscrita (sic) y los diversos arrendatarios que en ellos se consignan; III).- Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y la célula fiscal correspondiente; IV).- Última declaración provisional del ejercicio fiscal de 1999 presentada ante la autoridad competente el día 17 de enero de 2000; V).- Comprobante fiscal mediante el cual percibo ingresos gravados como arrendatario; VI).- Factura en donde se me traslada el impuesto al valor agregado que no puedo acreditar; VII).- Constancia de retención de impuesto sobre la renta



y retención del impuesto al valor agregado.

Analizando dicha documentación se llega a la conclusión que el suscrito sí justificó su interés jurídico, para acceder a la vía constitucional, en contra de las normas jurídicas que consideré inconstitucionales, así como se justifica la afectación que se me hace mediante los actos reclamados por las autoridades responsables, los cuales transgreden y lesionan mis derechos públicos, en particular, por lo establecido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.--- 3.- Por

otro lado, el fundamento toral del considerando cuarto de la sentencia que ahora recurro, consiste en: 'Que el suscrito no acreditó la afectación en su esfera jurídica, pues no demostró la presencia o daño individual concreto y directo ocasionado por el acto reclamado, requisito indispensable para la procedencia del juicio de garantías, y no se contienen las que reforman, adicionan o derogan en forma alguna el artículo 90, fracción VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta ni tampoco lo previsto por los diversos artículos 1º-A fracción II y 32, fracción tercera, último párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, como lo señala el quejoso, en su escrito de demanda de garantías.' ---

**El suscrito sí acreditó la afectación en su esfera jurídica y demostró la presencia del daño individual concreto y directo ocasionado por el acto reclamado, con las pruebas mencionadas en el**

punto anterior, pues, con dichas documentales, demostré encontrarme en los supuestos jurídicos de las normas que tildé de inconstitucionales, de conformidad con los conceptos de violación que hice valer en mi escrito de demanda de amparo, es decir, demostré que la inconstitucionalidad del artículo 90, fracción VI, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 1°.A, fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, porque el primero de ellos viola en perjuicio del suscrito la garantía de equidad, por establecer diferentes hipótesis de determinación de la base gravable, a sujetos pasivos de la obligación tributaria, que tienen el mismo objeto del impuesto (ingresos por arrendamiento) y el suscrito sólo puede aplicar la deducción de la tasa del 35% en lugar de la del 50% que aplican otros contribuyentes que cuenta con la misma fuente de ingresos. Y con relación al segundo cuerpo normativo, también justifiqué el trato desigual que me da la Ley con relación a otro tipo de contribuyentes, el que se me ocasionan otros gravámenes que no se le ocasionan a otros contribuyentes y que en la mecánica del acreditamiento la Ley me da otro tratamiento desigual al de otros contribuyentes.- Por otro lado, que el suscrito no demostró que en la Ley que reforma, adiciona o deroga diversas leyes fiscales, se contenía en forma alguna el artículo 90, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ni

24



tampoco lo previsto por los diversos artículos 1º-A, fracción II y 32, fracción tercera, último párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, como lo señala el suscrito, en su escrito de demanda de garantías.--- Para determinar que no era necesario la demostración de modificación específica de las normas que el suscrito tildó de inconstitucionales, me permito presentar los siguientes conceptos y criterios jurisprudenciales.--- Una reforma, adición o derogación parcial de la ley, debe tenerse que es un acto del poder legislativo, esto es, una manifestación de voluntad del órgano constitucional investido de la facultad normativo de carácter innovador.--- Como manifestación de voluntad del órgano legislativo, la creación, modificación y extinción de la ley están determinadas en el artículo 72 de la Constitución General de la República, en la parte que dice: Artículo 72.- (Lo transcribe).--- La observancia de la regla consagrada en este numeral, de la cual deriva que la reforma, adición o derogación parcial de la ley, de un acto legislativo se produce a través de otro acto dictado conforme al mismo procedimiento y a las mismas formalidades que dieron nacimiento, es decir, se trata de un nuevo acto legislativo tanto de la Ley del Impuesto sobre la renta como de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Pues basta para concluir que cualquier modificación de ese texto legal derivada de un acto



LA CORTE  
DE LA  
UNDA  
DE

*legislativo posterior, no queda comprendida dentro del anterior acto legislativo, por tratarse de otro pronunciamiento del legislador.- Este criterio que reitera que la producción de un nuevo acto legislativo, que reforma o modifica un texto legal, hace procedente la promoción de un nuevo juicio de amparo por todos aquellos que se vean afectados por el mismo, porque se trata de actos distintos que deben ser por lo tanto objeto de distintas acciones constitucionales, además, le da coherencia al sistema del juicio de amparo y garantiza con toda plenitud la defensa de los gobernados, en cuanto les permite impugnar cada pronunciamiento del órgano legislativo, no sólo cuando reforma parcial o totalmente un texto preexistente, sino inclusive cuando reproduce en términos idénticos un texto anterior, entonces el solo hecho de modificación de alguna parte de las Leyes del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado, máxime que estos cuerpos normativos, son de vigencia anual, hacen procedente el presente juicio de garantías, independientemente de que las normas tildadas de inconstitucional hayan sido modificadas o no, sino que se actualiza la procedencia de un juicio de amparo por el solo hecho de la modificación, aún cuando se trate de otras normas jurídicas de las ahora tildadas de inconstitucionales.--- Toma vigencia lo determinado en los siguientes criterios*



15

jurídicos sustentados por nuestro más Alto Tribunal Judicial de la Nación, los cuales declaran procedente la acción de amparo en aquellos casos en que se reclama una ley, a pesar de que el quejoso se haya sometido a una ley anterior de igual contenido.--- 'CONSENTIMIENTO. NO EXISTE RESPECTO DE NORMAS QUE CONTEMPLAN SITUACIONES JURÍDICAS IGUALES A LAS PREVISTAS EN UN ORDENAMIENTO ANTERIOR CONSENTIDO. (La transcribe)'.--- **Tesis** LEYES AMPARO CONTRA. CUANDO SE REFORMA UNA LEY DECLARADA INCONSTITUCIONAL O SE SUSTITUYE POR UNA DE CONTENIDO SIMILAR O IGUAL, PROCEDE UN NUEVO JUICIO POR TRATARSE DE UN ACTO LEGISLATIVO DISTINTO. (La transcribe)'.--- **Sirve también de apoyo, la tesis sustentada por el Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, noviembre de 1996, página 136, aplicable por analogía al caso en cuanto a que establece los efectos que produce la modificación de una ley, que permite que se presenten amparos, contra leyes que se tildan de inconstitucionales, cuando las mismas sufran alguna modificación, por intrascendente que parezca y en el caso en particular del artículo 90, fracción VI, segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se acreditó que había sido declarado inconstitucional. Criterio que literalmente expresa: 'LEYES, AMPARO**



CONTRA. LA SENTENCIA SÓLO PROTEGE AL QUEJOSO MIENTRAS EL TEXTO EN QUE SE CONTIENEN NO SEA REFORMADO O SUSTITUIDO POR OTRO. (La transcribe).--- La inconstitucionalidad del artículo 90, fracción VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de los artículos 1º-A fracción II y 32, fracción tercera, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, como lo señala el suscrito, en su escrito de demanda de garantías, los reclamó con fundamento en las tesis anteriores, porque así es el criterio que tiene sustentado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con el fin de que no se entendiera que ha existido un consentimiento tácito de las normas que son materia de este juicio de garantías, o bien como en el caso a estudio que se decretara un sobreseimiento por considerar que se estaba en una causal de improcedencia, porque aún cuando el suscrito se hubiere sometido a las disposiciones contempladas por una ley anterior, ello de ninguna manera puede implicar que las nuevas normas resulten derivadas de aquellas que fueron consentidas, ya que, desde el punto de vista formal y material son actos legislativos distintos. En apoyo de lo anterior, cabe citar el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicado en la página trescientos treinta y siete del Informe de Labores relativo al año de mil



40

*novecientos setenta y cuatro, rendido por el presidente de ese Alto Tribunal, que dice: 'LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. (La transcribe)'.--- Por todo lo anterior, solicito se considere fundado el presente agravio a fin de desestimar la causal de improcedencia que esgrime el a quo en el considerando cuarto de la sentencia y dejar sin efecto el sobreseimiento del resolutivo único de la sentencia de fecha 28 de septiembre de 2000, dentro del juicio de garantías intentado por el suscrito, procediéndose al estudio de fondo y amparar y otorgar la protección de la Justicia Federal."*

**QUINTO.-** Por razón de turno correspondió conocer del recurso al entonces Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Cuarto Circuito, ahora Tercer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo de ese Circuito, cuyo Presidente, por auto de veinticuatro de octubre de dos mil, lo admitió a trámite bajo el número 315/2000; posteriormente, en cumplimiento al Acuerdo General 84/2000, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante diverso proveído de fecha dos de enero de dos mil uno, ordenó remitir los autos a la Oficialía de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, quien a su vez los turnó al Primer Tribunal Colegiado de la propia Materia y Circuito.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, mediante acuerdo de fecha primero de febrero de



dos mil uno, se avocó al conocimiento del recurso de revisión, formándose el toca número 191/2001, y en sesión de treinta de octubre del mismo año, dictó resolución con los siguientes puntos resolutivos:

***"PRIMERO: En la materia de la revisión se revoca el sobreseimiento decretado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Nuevo León, en el juicio de Amparo V 152/2000.--- SEGUNDO: La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Enrique Emilio Marcos Giacomán, contra el acto que reclamó de las autoridades responsables, en relación al artículo 90, fracción VI, segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor a partir del uno de enero del dos mil.--- TERCERO: Este Tribunal Colegiado se declara legalmente incompetente para conocer del recurso de revisión interpuesto por el quejoso, en contra de la sentencia de veintiocho de septiembre del dos mil, en el juicio de amparo V 152/2000, en la parte que no fue materia de estudio en la presente ejecutoria consistente en la inconstitucionalidad que combate de los artículos 1o., inciso A, fracción II y 32, fracción III, último párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente a partir del uno de enero del dos mil, al subsistir el problema de constitucionalidad planteado, por lo que se remiten los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que resuelva lo que al respecto***



corresponda.--- CUARTO: Fórmese expedientillo con esta ejecutoria y las actuaciones subsecuentes; con su testimonio dése aviso al Juez del conocimiento y, remítase a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, copia certificada de la presente resolución, el diskette que la contenga y los autos que la integran, para los efectos precisados en el contexto de la presente ejecutoria."

Las consideraciones sustentadas en dicha resolución son del tenor siguiente:

"QUINTO: Debe quedar firme el sobreseimiento decretado, por lo que hace a las autoridades señaladas en el considerando segundo de dicho fallo, porque no se formularon agravios al respecto.--- Tiene aplicación la jurisprudencia 251, publicada en la página 427, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, Quinta Época, instancia: Pleno, Tomo: Parte VIII, que dice: REVISIÓN EN AMPARO. Comprende sólo los puntos de la sentencia que han sido recurridos, quedando el fallo del juez de Distrito, firme en la parte que no fue impugnada.'--- SEXTO:- Son fundados los agravios expuestos por el recurrente.--- Los actos reclamados se hicieron consistir en la inconstitucionalidad de la aprobación, expedición, promulgación y refrendo del Decreto legislativo de

*treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, mediante el cual se modificaron diversas leyes fiscales y otros ordenamientos federales, en relación con el artículo 90, fracción VI, segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del artículo 1o. apartado A, fracción II y 32 fracción III, último párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, así como las consecuencias respecto a la determinación y cobro del impuesto sobre la renta y las que deriven de la no retención del impuesto al valor agregado.--- El Juez Primero de Distrito en el Estado, mediante sentencia de veintiocho de abril del dos mil, resolvió decretar el sobreseimiento en el juicio con apoyo en las fracciones V y VI del artículo 73 de la Ley de Amparo.--- Las consideraciones que sustentan el fallo se contienen en el considerando cuarto, que dice: (se reproduce).--- Apoyó su determinación en las tesis de jurisprudencia de rubro: 'INTERÉS JURÍDICO, COMPROBACIÓN DEL.', 'INTERÉS JURÍDICO, NECESIDAD DE ACREDITARLO EN EL AMPARO CONTRA LEYES.', y 'AMPARO CONTRA LEYES VACATIO LEGIS CARENCIA DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR UNA LEY DURANTE ESE PERIODO.'--- El recurrente manifiesta que se viola en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, con relación a los artículos 90, fracción VI, segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la*



Renta y 1o., inciso A, fracción II y 32 fracción III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, haciendo valer los agravios siguientes:--- a). Que de conformidad con el artículo 22 fracción I de la Ley de Amparo, una ley puede ser reclamada como autoaplicativa, si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular siendo el caso que los preceptos que combate de inconstitucionales, toda vez que el primer acto de aplicación será cuando realice el primer pago provisional, sin necesidad de que exista un acto de aplicación de la ley, ya que el artículo 92 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 1o., fracción II y 32, fracción III de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, tienen el carácter de autoaplicativos. b). Que de acuerdo a la documentación presentada con la demanda de amparo, se puede llegar a la conclusión de que si justificó su interés jurídico, ya que, alega, demostró el daño individual concreto y directo ocasionado por el acto reclamado, además de comprobar la inconstitucionalidad de los mencionados numerales a través de sus conceptos de violación.--- c). Continúa señalando que no era necesario que demostrara que en la Ley reclamada que reforma, adiciona o deroga, diversas leyes fiscales, se contenía en forma alguna el artículo 90, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y los artículos 1o., inciso A, fracción II y 32, fracción III, último párrafo de la Ley del Impuesto al Valor

*Agregado, toda vez que una reforma, adición o derogación de la ley, debe tenerse que es un acto del Poder Legislativo, esto es, una manifestación de voluntad del órgano constitucional investido de la facultad normativa de carácter innovador.--- Que la facultad de voluntad del órgano legislativo, es decir, la creación, modificación y extinción de la ley están determinadas en el artículo 72 de la Constitución General de la República, añade, que la observancia a la regla consagrada por este numeral, de la cual deriva que la reforma, adición o derogación parcial de la ley, de un acto legislativo se produce a través de otro acto dictado conforme al mismo procedimiento y a las mismas formalidades que le dieron nacimiento, es decir, se trata de un nuevo acto legislativo de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por lo que, cualquier modificación del texto legal derivado de un acto legislativo posterior, no queda comprendida dentro del anterior acto legislativo, por tratarse de otro pronunciamiento del legislador.--- Sostiene que el criterio que reitera que la producción de un nuevo acto legislativo que reforma o modifica un texto legal, hace procedente la promoción de un nuevo juicio de amparo, porque se trata de actos distintos que deben ser por lo tanto objeto de distintas acciones constitucionales, que ello le da coherencia al sistema del juicio de amparo y*

11



garantiza la defensa del gobernado en cuanto les permite impugnar cada pronunciamiento del órgano legislativo, no sólo cuando reforma parcial o totalmente un texto preexistente, sino inclusive cuando reproduce en términos idénticos un texto anterior, por lo que, el solo hecho de modificación de alguna parte de las Leyes del Impuesto sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado, máxime que estos cuerpos normativos son de vigencia anual, hacen procedente el juicio de garantías, independientemente de que las normas tildadas de inconstitucionales hayan sido modificadas o no, sino que se actualiza la procedencia de un juicio de amparo por el solo hecho de la modificación aún cuando se trate de otras normas jurídicas distintas de las que ahora combate.--- Invoca a su favor los siguientes criterios: CONSENTIMIENTO. NO EXISTE RESPECTO DE NORMAS QUE CONTEMPLAN SITUACIONES JURÍDICAS IGUALES A LAS PREVISTAS EN UN ORDENAMIENTO ANTERIOR CONSENTIDO.; 'LEYES, AMPARO CONTRA CUANDO SE REFORMA UNA LEY DECLARADA INCONSTITUCIONAL O SE SUSTITUYE POR UNA DE CONTENIDO SIMILAR O IGUAL, PROCEDE UN NUEVO JUICIO POR TRATARSE DE UN ACTO LEGISLATIVO DISTINTO.' y 'LEYES. AMPARO CONTRA. LA SENTENCIA SÓLO PROTEGE AL QUEJOSO MIENTRAS EL TEXTO EN QUE SE CONTIENEN NO SEA REFORMADO O

*SUSTITUIDO POR OTRO.'--- Por cuestión de método se procede al estudio en primer término de los argumentos del quejoso narrados en el inciso c), los cuales resultan fundados, en la medida siguiente:--- El artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, dice: (se transcribe).--- Por su parte, el artículo 72 inciso f), de la Constitución Federal de la República que invoca el quejoso, dice: (se reproduce).--- De lo transcrito, como bien lo sostiene el quejoso, la Ley reclamada de inconstitucional mediante la cual se modifican diversas leyes fiscales publicada el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve en el Diario Oficial de la Federación, es un proceso legislativo nuevo, por lo tanto, contrario a lo que sostiene el A quo, ello da lugar a la procedencia del juicio de garantías en términos del artículo 22 de la Ley de Amparo.--- Lo anterior es así, ya que la creación de la Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales, al tratarse de un acto legislativo nuevo actualiza la procedencia del juicio de garantías, independientemente si en dicho acto legislativo se haya ocupado o no de los artículos 90, fracción VI, segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 1o., inciso A, fracción II y 32 fracción III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado que se reclaman de inconstitucionales.--- En efecto, en el caso concreto, sencillamente se debe atender si el nuevo*



proceso legislativo se adecuó a lo previsto por el artículo 72 inciso f), de la Constitución Federal de la República, para así establecer si se justifica la interposición del juicio de amparo, sin que sea obstáculo el que los preceptos legales tildados de inconstitucionales fueron o no reformados, modificados o adicionados mediante el acto legislativo.--- Precitado lo anterior, resultan fundados los agravios resumidos en los incisos a) y b), puesto que con las documentales que fueron exhibidas en el juicio de garantías, se justifica el interés jurídico del quejoso.--- En efecto, con las documentales consistentes en el contrato de arrendamiento y su modificación (fojas de la 28 a la 31), con el formato de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (foja 33) y con la declaración provisional del trimestre de octubre a diciembre de 1999 mil novecientos noventa y nueve (foja 36), se advierte que su actividad preponderante es la de arrendamiento de bienes inmuebles; acredita que obtiene ingresos gravados por la Ley del Impuesto sobre la Renta y que además, realiza actos o actividades objeto de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.--- Tiene aplicación la jurisprudencia 89/1997, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo VI, Diciembre de 1997, página 10, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA.

CUANDO SE REFORMA UNA LEY DECLARADA INCONSTITUCIONAL O SE SUSTITUYE POR UNA DE CONTENIDO SIMILAR O IGUAL, PROCEDE UN NUEVO JUICIO POR TRATARSE DE UN ACTO LEGISLATIVO DISTINTO. De acuerdo con el principio de relatividad de las sentencias que rige en el juicio de amparo, por cuya virtud el efecto protector de aquéllas únicamente alcanza al texto legal que fue materia de análisis en el juicio, no así a sus reformas ni a una ley posterior que reproduzca su contenido, debe estimarse procedente el juicio de garantías que se intente en contra de la reforma de una ley ya declarada inconstitucional respecto del quejoso, cualesquiera que sean sus similitudes o diferencias esenciales o accidentales con el texto anterior pues, además de que se trata de actos legislativos diversos, en cuanto constituyen distintas manifestaciones de la voluntad del órgano respectivo, el principio de seguridad jurídica exige que sea el Juez Federal quien, en un nuevo proceso, califique la regularidad constitucional del texto reformado o sustituto del ya analizado, para evitar que esta cuestión quede abierta a la interpretación subjetiva de las partes y que el quejoso quede en estado de indefensión, en cuanto carezca de la vía adecuada para hacer valer la identidad esencial existente entre el texto original y el texto posterior, considerando que tal materia no podría ser objeto de análisis a través de los procedimientos previstos en la Ley de Amparo para decidir sobre el cumplimiento de una sentencia



protectora, como son los referentes al incidente de inejecución, a la queja por defecto o exceso, o al incidente de repetición del acto reclamado, ninguno de los cuales permite censurar los nuevos actos de la autoridad legislativa, ya que ésta, en términos del citado principio de relatividad, no está limitada en su actuación por la sentencia de amparo.'--- **SÉPTIMO:-**

**En consecuencia, al resultar fundados los agravios de la recurrente, acorde con el artículo 91 de la Ley de Amparo, se levanta el sobreseimiento, procediéndose al estudio de las causales de improcedencia que hacen valer las autoridades responsables, mismas que son de estudio preferente en términos del artículo 73 último párrafo de la Ley de Amparo.--- El Procurador Fiscal de la Federación, hace valer como causales de improcedencia, las siguientes:--- a). La prevista en la fracción VI del artículo 73 de la Ley de Amparo, al señalar que los artículos 90 fracción VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 1o., inciso A, fracción II y 32, fracción III, último párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por su sola vigencia no le causan perjuicio al quejoso, sino que se requiere de un acto posterior de aplicación al tratarse de una ley con carácter de heteroaplicativa.--- No resulta aplicable la causal de improcedencia que se pretende hacer valer, toda vez que, contrario a lo que estiman las autoridades responsables, los artículos 90 fracción VI de la Ley**

*del Impuesto sobre la Renta y 1o., 1o. inciso A, fracción II y 32, fracción III, último párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, tienen el carácter de autoaplicativos y no de heteroaplicativos.--- Dichos numerales, en lo conducente, dicen: (se reproducen).--- Como se advierte de los numerales transcritos del Decreto legislativo publicado en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, mediante el cual se modifican diversas leyes fiscales, en vigor a partir del primero de enero del dos mil; tienen el carácter de autoaplicativos, puesto que gravan la actividad consistente en el uso o goce temporal de inmuebles, por lo tanto, si el quejoso se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes (foja 33) con la actividad preponderante de arrendamiento de bienes inmuebles, es claro que es sujeto de dichas contribuciones.--- Esto es así, ya que aún y cuando al momento de presentar la demanda de amparo, no había presentado su declaración trimestral provisional del ejercicio fiscal del dos mil, ello no significa que ésta declaración sea el primer acto de aplicación de las mencionadas leyes, o bien, que ese primer acto de aplicación lo deba de realizar la autoridad fiscal al requerir el pago de impuestos, ya que basta que se ubique a la actividad que se desarrolla dentro de la situación jurídica o de hecho prevista en la ley para que se le considere*

RECEIVED  
SECRETARIA  
DE ECONOMIA  
FISCAL  
MEXICO



como sujeto del impuesto, dado que, desde ese momento se causan las contribuciones respectivas conforme al artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación.--- Bajo este contexto, por la sola entrada en vigor del mencionado Decreto legislativo es que se le causa un perjuicio al quejoso, toda vez que se está en presencia de obligaciones en el pago de contribuciones que derivan del nacimiento de la ley, por lo que, no es necesario que se actualice condición alguna para que se genere el tributo, es decir, se trata de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada y, por tanto, el término para la interposición del juicio de amparo es de treinta días acorde a la fracción I del artículo 22 de la Ley de Amparo.--- Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Julio de 1997, tesis P./J. 55/97, página 5, que dice: 'LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en

vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un



caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.'--- b). **Mencionan las autoridades responsables, que se actualiza en el caso concreto la causal de improcedencia contenida en la fracción XI, del artículo 73 de la Ley de Amparo, al consentirse los actos reclamados, ya que al no haberse reformado, adicionado o derogado las disposiciones que se tildan de inconstitucionales, ello significa que no son producto de un acto legislativo nuevo y, por tanto, transcurrió en exceso el término previsto por el artículo 22, fracción I, de la ley de la materia.**--- De igual modo, es infundado lo pretendido ~~por~~ las autoridades responsables, pues como ya se dijo, independientemente de ~~que~~ los artículos que se combaten de inconstitucionales hayan sido o no motivo de estudio en el acto legislativo impugnado, lo que importa es, precisamente, que se trata de un acto legislativo nuevo conforme al artículo 72 inciso f), de la Constitución General de la República y, por tanto, ~~no~~ significa que la nueva ley que se controvierte tenga su origen o sustento en la diversa ley que fuera consentida, esto, al pagar las contribuciones de ejercicios anteriores, toda vez que, desde el punto de vista formal y material, son actos legislativos distintos.--- Resulta aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Séptima Época, Tomo I, Parte SCJN, tesis



210, página 202, que dice: 'LEYES, CONSENTIMIENTO DE LAS. NO EXISTE CUANDO DOS ORDENAMIENTOS LEGALES CONTEMPLAN SITUACIONES JURIDICAS IGUALES, AUN CUANDO SE HAYA CONSENTIDO LA CREADA POR EL PRIMERO DE AQUELLOS. Aun cuando la quejosa se hubiera sometido a las disposiciones que contemplaba la ley anterior y que tales disposiciones se recojan en la nueva ley reclamada, ello de ninguna manera puede implicar que la nueva ley resulte derivada de aquella que fue consentida, ya que, desde el punto de vista formal y material, son actos legislativos distintos.'--- Asimismo, es inaplicable el artículo 21 de la Ley de Amparo, dado que al ser de carácter autoaplicativo la Ley que se tilda de inconstitucional, debe observarse lo dispuesto por el artículo 22, fracción I, de la citada Ley, es decir, el término de treinta días hábiles para su impugnación.--- c). Como última causal de improcedencia, las autoridades responsables señalan que procede decretar el sobreseimiento de conformidad con el artículo 73 fracción XII y 21 de la Ley de Amparo, en virtud de que la presentación de la demanda es extemporánea, ya que el primer acto de aplicación no lo demostró el quejoso.--- Es infundado lo anterior, en principio, como ya se dijo, al tener el carácter de autoaplicativa la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado y, en segundo término, porque el



numeral 22 de referencia, es el aplicable al caso concreto, aunado a que el quejoso demostró realizar la actividad de arrendamiento de inmuebles, la cual se grava por las citadas legislaciones.--- En virtud de lo anterior, al no existir más causales de improcedencia hechas valer por las responsables, ni haberse advertido alguna diversa por este Tribunal conforme lo dispuesto por el artículo 73, último párrafo de la Ley de Amparo, se revoca la sentencia recurrida de veintiocho de septiembre del dos mil, consecuentemente, se procede al análisis de la inconstitucionalidad planteada en contra del artículo 90, fracción VI segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. OCTAVO.- Una vez analizadas las causales de improcedencia hechas valer por las autoridades señaladas como responsables, las cuales como quedó asentado son infundadas, se procede al estudio del concepto de violación expresado por el quejoso en su demanda de garantías, en relación al artículo 90 fracción VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor a partir del uno de enero del dos mil.--- Señala el quejoso, que el artículo 90 fracción VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta, viola en su perjuicio la garantía de equidad consagrada en el artículo 31, fracción IV, constitucional, ya que dicha norma discrimina a sujetos que cuentan con la misma fuente de riqueza o que se encuentran en la misma



*hipótesis normativa, para lo cual expresa lo siguiente:--- Que el impuesto sobre la renta que impugna en esta demanda de garantías grava los ingresos (objeto del impuesto) que se perciben por permitir el uso o goce temporal de inmuebles, agrega, que la base del impuesto lo constituye, el ingreso menos las deducciones autorizadas, deducciones que se encuentran establecidas en cada una de las fracciones que integra el artículo 90 de dicha ley, sin embargo el segundo párrafo de la fracción VI, establece que el contribuyente en lugar de deducir los gastos a que se refieren las seis fracciones del citado artículo 90, podrán optar (sic) si el inmueble lo otorga para casa habitación, deducir el cincuenta por ciento de sus ingresos en substitución de las deducciones a que se refiere dicho precepto legal, y que, en los demás casos se podrá optar por deducir el treinta y cinco por ciento en substitución de las deducciones a que dicho dispositivo se refiere.--- Que de lo anterior, se aprecia que a una misma fuente de riqueza (arrendamiento de inmuebles) se le ubica en bases diferentes de tributación, máxime que el propietario no le da destino diferente al inmueble sino quien se lo da es el arrendatario, por lo que el obligarlo a que determine la base gravable utilice el porcentaje del treinta y cinco por ciento en lugar del cincuenta por ciento, estaría dándole un tratamiento desigual con relación a otro contribuyente cuando ambos*



están en un mismo plano de igualdad al arrendar inmuebles, por lo que al aplicar dicha tasa del treinta y cinco por ciento en lugar del cincuenta por ciento hace que la norma sea violatoria del artículo 31, fracción IV, constitucional, invocando a su favor la tesis de rubro: 'RENTA, IMPUESTO SOBRE LA. NO PUEDEN CONSIDERARSE PORCENTAJES DIFERENTES LOS INGRESOS PROVENIENTES DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DESTINADOS A CASA HABITACIÓN Y LOS QUE PROVIENEN RESPECTO DE AQUELLOS QUE NO SE DESTINAN A ESE FIN.'--- Es infundado el argumento anterior.--

- El artículo 90, párrafo siguiente a la fracción VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente para el año dos mil, disponía textualmente lo siguiente:--- (Se transcribe).--- De la anterior transcripción se advierte claramente, que los contribuyentes que otorguen el uso o goce temporal de inmuebles para casa habitación podrán deducir el cincuenta por ciento de los ingresos obtenidos por tal concepto y en lo que se refiere a los ingresos derivados de arrendamiento de inmuebles que no se destinen a casa habitación corresponde aplicarle la deducción del treinta y cinco por ciento establecida en el numeral 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo tanto, en el caso resulta incorrecto que dicha norma sea inconstitucional, ya que solamente tiene derecho a deducir el cincuenta por ciento de los ingresos que obtenga por arrendamiento de

*inmuebles para casa habitación y respecto a los ingresos que perciba por arrendamiento de inmuebles que no se destinen a ese fin únicamente podrá deducir el treinta y cinco por ciento, esto, atendiendo al destino que se otorgue al inmueble arrendado.--- En esa virtud, no es procedente lo afirmado por el agraviado en el sentido de que no es motivo justificado desde el punto de vista jurídico el hecho de que por obtener ingresos por otorgar el uso o goce de inmuebles no destinados a casa habitación, tenga que hacer una separación de dichos ingresos, idénticos en cuanto a su concepto, ya que como se señaló en líneas anteriores, el artículo 90 del citado ordenamiento legal, establece limitantes respecto a la deducción de ingresos provenientes de arrendamiento de inmuebles destinados a casa habitación y respecto a aquéllos ingresos que se obtengan por arrendamiento de inmuebles que no se destinen a ese fin, de ahí lo infundado del concepto de violación en estudio.--- A mayor abundamiento, cabe decir que sobre el tema de inconstitucionalidad del artículo 90, fracción VI, segundo párrafo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia (sic) P. CIII/99, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Novena Época, diciembre de 1999, páginas 24 y 25, que a la letra señala:--- 'RENTA. LA DEDUCCIÓN DEL 50% DE*



LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACIÓN, ESTABLECIDA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY RELATIVA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (TEXTO VIGENTE A PARTIR DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO).- El legislador se encuentra constitucionalmente facultado para establecer distinciones en el tratamiento de los contribuyentes, con tal que dicha regulación no resulte caprichosa o injustificada. El artículo 90, fracción VI, segundo párrafo que establece como opción de los contribuyentes el deducir el 50% de los ingresos recibidos por arrendamiento si el inmueble se destina a casa habitación y el 35% a otro uso no viola el principio constitucional de equidad tributaria, dado que la distinción no resulta injustificada o caprichosa, al desprenderse que se trata de incentivar el que se otorgue el uso o goce temporal de inmuebles para vivienda, lo que no sólo pretende alentar la solución de una necesidad socioeconómica, sino además se encuentra establecido como un derecho programático en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el penúltimo párrafo del artículo 4º.---

**Conforme lo anterior, debe negarse el amparo de la justicia federal solicitado en cuanto a la inconstitucionalidad planteada del artículo 90, fracción VI segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente al uno de enero del dos mil.-**

-- NOVENO.- Ahora bien, en relación a los artículos 1o., inciso A, fracción II y 32, fracción III, último párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en vigor a partir del uno de enero del dos mil que también se tildan de inconstitucionales, cabe señalar que, al no existir más causales de improcedencia hechas valer por las responsables, ni haberse apreciado por este Tribunal Colegiado que se actualice otra para ser analizada de oficio, conforme lo dispuesto por el artículo 73, último párrafo de la Ley de Amparo, lo que procede es revocar la sentencia recurrida de veintiocho de septiembre del dos mil, sin que sea el caso de entrar al fondo del asunto como lo dispone el artículo 91, fracción III, de la ley de la materia, en cuanto al concepto de violación que se endereza en contra de los citados numerales, mediante el cual se argumenta su inconstitucionalidad, razón por la cual, lo que procede es, en la materia de la revisión, revocar el sobreseimiento recurrido, atento a lo expuesto en el considerando sexto de esta ejecutoria y, con fundamento en el punto tercero, fracción I, del Acuerdo número 6/1999, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para resolverlo, por lo que se deja a salvo la jurisdicción del Máximo Tribunal de la República, para que tenga a bien resolver lo que corresponda."

87



**SEXTO.-** En cumplimiento al tercero y cuarto puntos resolutivos de la sentencia que antecede, el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado del conocimiento, remitió los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la substanciación del recurso de revisión.

**SÉPTIMO.-** Recibidos los autos en este Alto Tribunal, su Presidente, por acuerdo de fecha cuatro de diciembre de dos mil uno, admitió a trámite el recurso interpuesto registrándolo bajo el número 487/2001.

El Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, no formuló pedimento.

**OCTAVO.-** Mediante proveído de once de enero de dos mil dos, se turnó el asunto al señor Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

Previo dictamen del Ministro ponente, el presente asunto se radicó en esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

### CONSIDERANDO:

**PRIMERO.-** Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el

AL DE  
ACORDO,  
EN LA  
SALA DE  
ACUERDOS.

presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuarto transitorio del Decreto de reformas a ésta, de diez de junio de mil novecientos noventa y nueve; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 21, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y punto tercero del Acuerdo 4/2000, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de marzo de dos mil, pues se interpuso con posterioridad a la vigencia del citado Acuerdo, en términos del punto tercero transitorio del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio del año dos mil uno, en contra de una sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 90, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 1º A, fracción II, inciso a) y 32, fracción III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y aun cuando subsiste en el caso el problema de constitucionalidad hecho valer, resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno en tanto que sobre el tema existen precedentes en los que se aborda el tópico cuestionado.

**SEGUNDO.-** Previamente al estudio del asunto, conviene destacar los antecedentes del caso.

1. Mediante escrito presentado el diez de febrero de dos mil, en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, Enrique Emilio Marcos Giacomán promovió juicio de amparo, en el que señaló como autoridades responsables al Congreso de la Unión, y



como actos reclamados, en lo fundamental, la promulgación, expedición, refrendo y publicación del Decreto mediante el cual se modifican diversas leyes fiscales, entre ellas la Ley del Impuesto sobre la Renta y Ley del Impuesto al Valor Agregado, publicados en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, en concreto, los artículos 90, fracción VI, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 1°-A, fracción II, inciso a) y 32 fracción III, último párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; como preceptos violados los artículos 1°, 13, 14, 16 y 31, fracción IV, constitucionales; y como conceptos de violación, en esencia, los que a continuación se sintetizan:

a) Que el artículo 90, fracción VI, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, viola en su perjuicio la garantía de equidad tributaria porque discrimina a sujetos que se encuentran en la misma hipótesis normativa, al permitir a los arrendatarios de inmuebles destinados a casa habitación optar entre deducir los gastos a que se refiere el artículo 90 en sus diferentes fracciones, o deducir el cincuenta por ciento de sus ingresos, mientras que en los demás casos únicamente se podrá optar por deducir el treinta y cinco por ciento en substitución de las deducciones a que dicho dispositivo se refiere; de manera que a una misma fuente de riqueza (arrendamiento de inmuebles) se le ubica en bases diferentes de tributación. En consecuencia, la circunstancia de que se vea obligado a determinar la base gravable aplicando el porcentaje del treinta y cinco por ciento y no el del cincuenta por ciento, lo sitúa en un plano desigual con relación a otros contribuyentes que también arriendan inmuebles.

b) Que los artículos 1°-A, fracción II, inciso a) y 32, fracción III, último párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, son también violatorios de la artículo 31, fracción IV, constitucional, porque las personas morales que realizan pagos a los contribuyentes personas físicas, con motivo del uso o goce temporal de bienes otorgados por éstas, como es su caso, están obligadas a retener el impuesto al valor agregado correspondiente, lo cual no ocurre con otros contribuyentes lo que constituye un trato inequitativo, al dar a esa relación entre personas que tienen la misma obligación tributaria, en igualdad de condiciones, un trato desigual, y consecuentemente que los enunciados preceptos, violan en su perjuicio la garantía de equidad consagrada en el artículo 31, fracción IV, constitucional.

2. Correspondió al Juez Primero de Distrito en el Estado de Nuevo León conocer de la demanda de garantías, quien sobreseyó en el juicio de amparo con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de dicha Ley, por falta de interés jurídico del quejoso, ya que los preceptos tildados de inconstitucionales no fueron reformados, adicionados o derogados mediante el Decreto de reformas impugnado.

3. Inconforme con dicha sentencia, el quejoso interpuso recurso de revisión, en el que expresó los siguientes agravios:



a) Es incorrecto el sobreseimiento decretado por el Juez del conocimiento, toda vez que el quejoso sí acreditó su interés jurídico en el juicio, teniendo en consideración que los preceptos legales impugnados son de carácter autoaplicativo, por lo que conforme al artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo, pueden recurrirse desde su entrada en vigor.

b) Que con las copias certificadas que acompañó a su demanda de amparo (entre otras, del contrato de arrendamiento de un inmueble, de fecha primero de enero de mil novecientos noventa y siete, y su modificación de fecha treinta y uno de diciembre del mismo año, celebrado entre el quejoso y una persona moral, en el que convinieron que el inmueble arrendado se destinaría únicamente para uso comercial; del formato de inscripción del quejoso en el Registro Federal de Contribuyentes; y de la declaración de pago provisional correspondiente a ingresos obtenidos por el arrendamiento de bienes inmuebles del quejoso, durante el trimestre de octubre a diciembre de mil novecientos noventa y nueve), se corrobora que es sujeto del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado, y al encontrarse en los supuestos jurídicos de las normas que tildó de inconstitucionales, se acredita la afectación a su esfera jurídica.

c) Que contrario a lo sostenido por el A quo, la producción de un nuevo acto legislativo, que reforma o modifica un texto legal, hace procedente el amparo respecto de todos aquellos preceptos que se vean afectados por el mismo, porque se trata de actos distintos que deben ser objeto de distintas acciones constitucionales, incluso cuando reproduzcan en términos

idénticos un texto anterior; luego, basta que se haya modificado alguna parte de los ordenamientos legales que contienen los preceptos impugnados, para que proceda el juicio de amparo, independientemente de que las normas tildadas de inconstitucionales hayan sido modificadas o no.

d) Que la inconstitucionalidad del artículo 90, fracción VI, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta quedó demostrada en sus conceptos de violación, en los que adujo esencialmente que viola la garantía de equidad tributaria prevista en el artículo 31, fracción IV, constitucional, porque le impide aplicar la deducción del cincuenta por ciento que de los ingresos recibidos por arrendamiento de inmuebles si éstos se destinan a casa habitación, y en su caso únicamente puede aplicar el treinta y cinco por ciento por estar destinado a otro uso.

e) Que como lo señaló en sus conceptos de violación, los artículos 1°-A, fracción II, inciso a) y 32, fracción III, último párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, transgreden el principio de equidad tributaria porque prevén una mecánica para el acreditamiento del impuesto al valor agregado que impide al quejoso acreditar el impuesto que le es retenido.

4. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito se avocó al conocimiento del recurso de revisión, y mediante resolución de treinta de octubre de dos mil uno, determinó que en el caso no se surten causas de improcedencia, por lo que revocó la sentencia recurrida y emprendió el análisis del artículo 90, fracción VI, de la Ley del



Indepto sobre la Renta, respecto del cual negó el amparo conforme al criterio contenido en la tesis aislada CIII/99, del Pleno de este Alto Tribunal, cuyo rubro es: **"RENTA. LA DEDUCCIÓN DEL 50% DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACIÓN, ESTABLECIDA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY RELATIVA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (TEXTO VIGENTE A PARTIR DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO)."**, y reservó jurisdicción a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se pronunciara respecto a la constitucionalidad de los artículo 1°-A, fracción II, inciso a) y 32, fracción III, último párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Cabe señalar que el criterio contenido en la supracitada tesis aislada integró jurisprudencia, la cual fue aprobada en sesión de once de diciembre de dos mil uno por el Pleno de este Alto Tribunal, correspondiéndole el número 151/2001, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, página 6, cuyo rubro y texto son:

**"RENTA, CÁLCULO DEL IMPUESTO RELATIVO. LA DEDUCCIÓN DEL CINCUENTA POR CIENTO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR ARRENDAMIENTO DE CASA-HABITACIÓN, ESTABLECIDA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY RELATIVA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (TEXTO VIGENTE A PARTIR DE MIL**

**NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO). El legislador se encuentra constitucionalmente facultado para establecer distinciones en el tratamiento de los contribuyentes, con tal que dicha regulación no resulte caprichosa o injustificada. El artículo 90, fracción VI, segundo párrafo que establece como opción de los contribuyentes el deducir el cincuenta por ciento de los ingresos recibidos por arrendamiento si el inmueble se destina a casa-habitación y el treinta y cinco por ciento a otro uso no viola el principio constitucional de equidad tributaria, dado que la distinción no resulta injustificada o caprichosa, al desprenderse que se trata de incentivar el que se otorgue el uso o goce temporal de inmuebles para vivienda, lo que no sólo pretende alentar la solución de una necesidad socioeconómica, sino además se encuentra establecido como un derecho programático en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el penúltimo párrafo del artículo 4."**

**TERCERO.-** En primer término se precisa que esta Segunda Sala no entrará al análisis de los agravios esgrimidos por el recurrente, sintetizados en los incisos a) al e) del punto tercero del considerando que antecede, habida cuenta que ya fueron motivo de pronunciamiento por el Tribunal Colegiado que previno en el conocimiento del asunto, al haber revocado la sentencia recurrida y negado el amparo, respectivamente, de manera que la materia de la revisión, competencia de esta



Segunda Sala, únicamente se circunscribe al planteamiento de la constitucionalidad de los artículos 1º-A, fracción II, inciso a) y 32, fracción III, último párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

**CUARTO.-** Una vez precisado lo anterior, se procede al análisis del agravio único que es materia de la revisión, competencia de este Alto Tribunal.

Previamente al estudio de dicho agravio, es conveniente, en primer lugar, transcribir el texto de los artículos en cuestión de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, así como del artículo 1º de la Ley citada, con el propósito de conocer el objeto del impuesto y qué aspectos del mismo están regulando las normas impugnadas. Tenemos entonces que los artículos 1º, 1º-A, fracción II y 32, fracción III, último párrafo del ordenamiento en cita establecen:

***“ARTÍCULO 1o.- Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes:***

...

***III. Otorguen el uso o goce temporal de bienes.***

...

***El contribuyente trasladará dicho impuesto, en forma expresa y por separado, a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente, o reciban los servicios. Se***

*entenderá por traslado del impuesto el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a dichas personas de un monto equivalente al impuesto establecido en esta Ley, inclusive cuando se retenga en los términos de los artículos 1o.-A o 3o., tercer párrafo de la misma.*

*El contribuyente pagará en las oficinas autorizadas la diferencia entre el impuesto a su cargo y el que le hubieran trasladado o el que él hubiese pagado en la importación de bienes o servicios, siempre que sean acreditables en los términos de esta Ley. En su caso, el contribuyente disminuirá del impuesto a su cargo, el impuesto que se le hubiere retenido."*

*"ARTÍCULO 1o.-A. Están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade, los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos:*

*...*

*II. Sean personas morales que:*

*a) Reciban servicios personales independientes, o usen o gocen temporalmente bienes, prestados u otorgados por personas físicas, respectivamente.*

*...*

*Quienes efectúen la retención a que se refiere este artículo sustituirán al enajenante, prestador de servicio u otorgante del uso o goce temporal de*

PUP  
AJP  
JEB  
CJC



bienes en la obligación de pago y entero del impuesto.

...

**"ARTÍCULO 32.-** Los obligados al pago de este impuesto y las personas que realicen los actos o actividades a que se refiere el artículo 2o.-A tienen, además de las obligaciones señaladas en otros artículos de esta Ley, las siguientes:

...

**III.-** Expedir comprobantes señalando en los mismos, además de los requisitos que establezcan el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento, el impuesto al valor agregado que se traslada expresamente y por separado a quien adquiera los bienes, los use o goce temporalmente o reciba los servicios. Dichos comprobantes deberán entregarse o enviarse a quien efectúa o deba efectuar la contraprestación, dentro de los 15 días siguientes a aquél en que se debió pagar el impuesto en los términos de los artículos 11, 17 y 22 de esta Ley.

...

Los contribuyentes a los que se retenga el impuesto deberán expedir comprobantes con la leyenda 'Impuesto retenido de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor Agregado.'



CORTE DE  
MAN: ON,  
DA LGA  
ACU

Ahora bien, no le asiste la razón al recurrente al sostener que los preceptos reclamados, los artículos 1º A, fracción II, y 32, fracción III, último párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado resultan inequitativos, en tanto introducen distinciones entre categorías de contribuyentes sujetos al impuesto de que se trata, y tratan de manera desigual a los iguales. Por el contrario, este órgano colegiado considera que los artículos 1º-A, fracción II, y 32, fracción III, último párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado no transgreden el principio de equidad tributaria.

Dicho principio, desarrollado jurisprudencialmente a partir del texto del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, se ha formulado como la igualdad ante la misma Ley tributaria de los sujetos pasivos de un impuesto, quienes deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a las hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones o plazos de pago.

La igualdad a que se refiere este principio implica que las disposiciones tributarias deben tratar de igual manera a quienes se encuentren en la misma situación y de manera desigual a aquellos contribuyentes que se ubiquen en una situación diversa; en este contexto, para acatar esta disposición constitucional, el legislador no sólo está facultado, sino obligado a establecer categorías y clasificar a los contribuyentes, siempre que esta diferenciación no sea caprichosa, arbitraria o tenga por objeto hostilizar a determinada clase de contribuyentes.



Las consideraciones así plasmadas, encuentran apoyo en las tesis Jurisprudenciales P./J. 42/97 y P. P./J 24/2000, sustentadas por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pueden consultarse, respectivamente, en la página 36 del Tomo V, Junio de 1997 y página 35 del Tomo XI, Marzo de 2000, ambos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos textos son los siguientes:

**"EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES. El texto constitucional establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; en relación con la materia tributaria, consigna expresamente el principio de equidad para que, con carácter general, los Poderes públicos tengan en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Conforme a estas bases, el principio de equidad se configura como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico de la producción normativa y de su posterior interpretación y aplicación. La conservación de**



ORDEN DE  
M...  
E...  
CUE...

*este principio, sin embargo, no supone que todos los hombres sean iguales, con un patrimonio y necesidades semejantes, ya que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acepta y protege la propiedad privada, la libertad económica, el derecho a la herencia y otros derechos patrimoniales, de donde se reconoce implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas. El valor superior que persigue este principio consiste, entonces, en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica."*

**"IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.** De una revisión a las diversas tesis sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno al principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, necesariamente se llega a la conclusión de que, en esencia, este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran



en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo establece y regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa; implicando además, que se establezca que para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, sino que se sustenten en bases objetivas que razonablemente justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales."

Una vez citado el principio de equidad tributaria, del análisis efectuado sobre los artículos que el quejoso tilda de inconstitucionales, se advierte que no establecen categorías de contribuyentes diversas, ni suponen la imposición de cargas, variación de la base, tasa u objeto del impuesto, tampoco establecen plazos distintos para el pago o deducciones desiguales para unos y otros, sino que regulan el mecanismo mediante el cual el impuesto al valor agregado debe ser enterado

ante la autoridad hacendaria, estableciéndose la obligación, para determinados contribuyentes, de retener el impuesto trasladado y enterarlo directamente al fisco, substituyendo en tal obligación al causante directo del impuesto, circunstancia que obliga a estudiar si la imposición de este tipo de deberes supone o no la transgresión del principio de equidad ya definido.

Al respecto destaca que los preceptos impugnados, los diversos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado que regulan el sistema de retención de esta contribución, no guardan relación alguna con el contexto normativo que regula lo relativo a sus diversos hechos imponibles, el momento de su causación, el procedimiento para determinar la base relativa, las diversas tasas aplicables y las respectivas hipótesis de exención, sino que se inserta dentro del conjunto de normas que regulan el procedimiento de traslación y acreditamiento que deben realizar los contribuyentes para determinar el monto al que asciende la contribución que deben enterar al fisco.

Ante ello, debe tomarse en cuenta que el impuesto al valor agregado es un tributo de naturaleza compleja dado que, por una parte, se establecen toda una serie de normas que regulan lo relativo a su objeto, su momento de causación, el procedimiento para determinar la base relativa, las diversas tasas aplicables y las respectivas hipótesis de exención; y, por otra, se prevé el mecanismo a través del cual los contribuyentes del tributo trasladarán el impuesto que se cause y, en su caso, acreditarán en contra de éste el que les sea trasladado, todo ello con el fin de determinar al final de un período de tiempo cuál es el monto que

EXPRE  
JUSTICI  
S E G  
SECRET



concepto del impuesto en comento les corresponde enterar al fisco.

Además, cabe señalar que la obligación tributaria a cargo de los contribuyentes del impuesto al valor agregado nace en el momento en que se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en el artículo 1º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, es decir, cuando tiene lugar la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y la importación de bienes o servicios.

De especial relevancia resulta que, conforme al artículo 1º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, son sujetos pasivos directos del impuesto el enajenador de bienes, el prestador de servicios independientes, el importador de bienes o servicios y el que otorga el uso o goce temporal de bienes.

Además, los sujetos pasivos del impuesto se encuentran obligados a trasladarlo por separado a las personas a las que enajenen bienes, otorguen su uso o goce temporal o presten servicios, traduciéndose el referido traslado en el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a estas últimas personas de un monto equivalente al impuesto que se genere por la actividad correspondiente.

Por su parte, el artículo 1º-A de la ley citada, cuya constitucionalidad se controvierte, establece a cargo de diversos sujetos que reciben el traslado del impuesto la obligación de enterar el que se genere cuando tengan lugar los hechos

imponibles que grava el impuesto en comento, atendiendo a dos circunstancias, primero, a que el sujeto que recibe el traslado constituya una persona moral y, segundo, a que el hecho imponible sea realizado por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente o base fija en el país.

Así, cuando una persona moral reciba el traslado del impuesto al valor agregado, deberá retener el monto respectivo si el hecho imponible consiste en: a) La enajenación de bienes mediante dación en pago o adjudicación judicial o fiduciaria; b) La prestación de servicios personales independientes o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, por parte de personas físicas; c) La enajenación de desperdicios para ser utilizados como insumo de su actividad industrial o para su comercialización; d) La prestación de servicios de autotransporte terrestre de bienes, por parte de personas físicas o morales.

Por otro lado, cuando el hecho imponible consista en la enajenación de bienes tangibles, o el otorgamiento del uso o goce temporal de éstos, realizados por residentes en el extranjero, sin establecimiento permanente o base fija en el país, ello dará lugar a que la persona física o moral que adquiera aquéllos o disfrute de ese uso o goce temporal deberá retener el impuesto al valor agregado que deba trasladársele.

Como se advierte de lo anterior, el sistema de retención del impuesto al valor agregado no guarda relación con el contenido de normas jurídicas que regulan el respectivo hecho imponible. Su momento de causación, el procedimiento para determinar la base

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SUPREMA CO  
RTE DE JUSTICIA DE LA  
FEDERACIÓN  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
74



...o las diversas tasas aplicables, sino que se inserta dentro del mecanismo que rige el traslado y acreditamiento de ese tributo y determina el monto al que, finalmente, asciende la respectiva obligación tributaria.

En ese contexto, para abordar el estudio de los planteamientos de inequidad que hace valer el quejoso, debe precisarse que el sistema de retención cuya constitucionalidad controvierte no modifica el monto de la obligación tributaria que le corresponde enterar al fisco, dado que de su análisis se advierte que, en todo caso, su aplicación podrá dar lugar a que al final del respectivo período de tributación se genere a su cargo un saldo a favor, circunstancia que ni desconoce su capacidad contributiva, ni constituye una situación que derive, en sí mismo, del sistema impugnado, pues antes de la entrada en vigor de éste, las normas que regían el impuesto en comento, permitían la generación de saldos a favor.

En efecto, para corroborar que el sistema de retención impugnado no modifica el monto de la obligación tributaria que nace al realizar cualquiera de los hechos imponible que grava el impuesto al valor agregado, basta acudir a un ejemplo numérico.

Así, verbigracia, antes de la entrada en vigor del sistema de retención, un gobernado que prestaba en el período respectivo servicios personales a una empresa, por un monto de cien mil pesos (\$100,000.00), generándose un impuesto al valor agregado por la cantidad de quince mil pesos (\$ 15,000.00),

trasladaba esta cantidad a la empresa y recibía materialmente este dinero.

En principio, debía enterar al fisco esos quince mil pesos (\$15,000.00), pero podía acreditar en contra de éstos, el impuesto al valor agregado que se le hubiera trasladado al realizar los gastos para prestar el servicio. Destaca que estos quince mil pesos (\$15,000.00) no surgían del patrimonio del contribuyente, sino del consumidor final que recibe el traslado.

Si en el mismo período le hubieren trasladado diez mil pesos (\$10,000.00), que formalmente se sufragaban con su patrimonio, restaba éstos a los quince mil (\$ 15,000.00) que él había trasladado material y jurídicamente, por lo que tendría que enterar al fisco únicamente cinco mil pesos (\$ 5,000.00). Esta cantidad no provenía de su patrimonio, sino del consumidor que recibió el servicio respectivo. En este caso la hacienda pública recibía cinco mil pesos (\$ 5,000.00) por concepto de impuesto al valor agregado.

A diferencia de lo anterior, si en el mismo período al citado contribuyente le hubieren trasladado impuesto al valor agregado por la cantidad de dieciséis mil pesos (\$ 16,000.00), cantidad que salía de su patrimonio, al restar o acreditar éstos respecto de los quince mil que el trasladó (\$15,000.00), recuperaba en esta cantidad el impuesto que se le había trasladado y surgía a su favor un saldo de mil pesos (\$1,000.00), los que debían pagarse o compensarse al contribuyente. En este caso la hacienda



única no recibía impuesto al valor agregado derivado de esa cadena productiva.

Ahora bien, con el nuevo sistema de retención, jurídicamente sigue existiendo el traslado, es decir, el contribuyente seguirá trasladando el impuesto que se genere por la respectiva operación, la única diferencia es que los quince mil pesos (\$ 15,000.00) que traslada no quedarán materialmente bajo su dominio, sino del sujeto que recibió la traslación, el cual tiene la obligación de enterarlo al fisco, sin que proceda acreditamiento, compensación o disminución alguna. Entonces, bajo el nuevo sistema esos quince mil pesos ingresan a la hacienda pública y provienen del patrimonio del consumidor del servicio respectivo.

En esos términos, en el ejemplo referido, si bien el contribuyente no tendrá bajo su dominio los quince mil pesos (\$ 15,000.00) que trasladó, ello no modificará el monto de su obligación tributaria, ni la afectación que ésta le genera a su patrimonio.

En efecto, si en el período respectivo le trasladan impuesto al valor agregado, que cumple con los requisitos para ser acreditable, equivalente a diez mil pesos (\$10,000.00), el cual es pagado con su patrimonio, para calcular el saldo respectivo, deberá restar éstos de la cantidad que jurídicamente trasladó, es decir, quince mil pesos (\$15,000.00) de lo que resultará un impuesto a cargo por la cantidad de cinco mil pesos (\$5,000.00).

Ahora bien, al existir impuesto a cargo, como lo establece el artículo 1°, párrafo último, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el contribuyente deberá disminuir de éste el impuesto que se le retuvo, es decir, quince mil pesos (\$15,000.00), lo que da como resultado un saldo a favor de diez mil pesos (\$ 5,000.00 - \$ 15,000.00 = \$ 10,000).

Al tenor de este procedimiento, al igual que en el sistema vigente con anterioridad, el contribuyente no resentirá en su patrimonio el impuesto al valor agregado, pues con el saldo a favor que se genera, estará recuperando los diez mil pesos (\$10,000.00) que le fueron trasladados y el fisco recibirá, a final de cuentas, cinco mil pesos (\$5,000.00), es decir, la misma cantidad que se generaba existiendo el mismo monto de impuesto acreditable y trasladado por algún contribuyente.

Como se advierte, el nuevo sistema no modifica la afectación que genera al patrimonio de los contribuyentes el mecanismo de traslado y acreditamiento del impuesto al valor agregado; máxime que, en realidad, al patrimonio que trasciende jurídicamente esa contribución es al de los consumidores finales, pues como quedó precisado el monto que al final de cuentas quede en manos del fisco provendrá de éstos y no de los contribuyentes del impuesto al valor agregado.

En tal virtud, para analizar si las normas impugnadas otorgan un trato equitativo a los gobernados resulta irrelevante cuál es el hecho imponible que los mismos realizan, pues si tales preceptos regulan una circunstancia ajena a éste, como lo es el



Procedimiento de traslado y acreditamiento del impuesto generado, para pronunciarse sobre su equidad deben tomarse en cuenta las circunstancias jurídicas y fácticas que trascienden al funcionamiento de ese mecanismo.

Dicho en otras palabras, para analizar la equidad del sistema de traslado y acreditamiento del impuesto al valor agregado no debe atenderse a la situación en que se ubican frente al hecho imponible los contribuyentes, pues la justificación constitucional o la inconstitucionalidad del trato igual o desigual que se dé en las normas respectivas no depende de los términos en que se realice la enajenación de bienes, el otorgamiento del uso o goce temporal de éstos o la prestación de servicios personales independientes, sino de las circunstancias que trascienden al traslado y acreditamiento del impuesto en comento, las que difieren dependiendo de la capacidad administrativa y contable de los contribuyentes y del grado de control que el Estado tenga sobre las mismas.

Al efecto, debe tenerse presente que el impuesto al valor agregado constituye un tributo de traslado obligatorio, por lo que jurídicamente, en lo general, no tiende a afectar el patrimonio de los contribuyentes del mismo, sino el de los consumidores finales que reciben, indefectiblemente, la correspondiente carga económica ya que, en todo caso, de existir un saldo a cargo de los contribuyentes éste tendrá su origen y se cubrirá con el impuesto trasladado al consumidor final.

En ese contexto, para determinar por qué la norma impugnada brinda un trato desigual a los desiguales que se encuentra justificado en sede constitucional, conviene tener presente cuáles fueron las causas y los fines que llevaron al establecimiento del sistema de retención impugnado, para lo cual conviene acudir a la exposición de motivos que dio lugar al proceso legislativo del que derivó el Decreto publicado el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho en el Diario Oficial de la Federación, en la que se estableció, en la parte que interesa:

***“...Ley del Impuesto al Valor Agregado...1. Retención del Impuesto.---...Congruente con la práctica internacional, así como con la reforma aprobada en el año de 1996 por esa H. Cámara de Diputados, oportunidad en la que se autorizó a las instituciones de crédito a efectuar la retención de este impuesto por las enajenaciones de bienes que mediante dación en pago o adjudicación judicial o fiduciaria les efectuaban sus deudores, se propone ampliar los supuestos en los cuales quienes adquieren los bienes o servicios deben efectuar la retención y el entero del impuesto por los actos o actividades que se prevén en el artículo 1º-A.--- En la presente reforma se propone ampliar el esquema de retención del IVA en los, siguientes casos para las personas morales que adquieran desperdicios industrializables de personas físicas y para las personas morales que reciban servicios personales***



independientes o usen o gocen temporalmente bienes de personas físicas, así como cuando adquieran bienes tangibles o los usen o gocen temporalmente, de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente o base fija en el país. Este mecanismo también se establecería en el caso de las erogaciones realizadas por la Federación y sus organismos descentralizados respecto de sus proveedores personas físicas.--- Dicha propuesta tiene como objetivo reducir la evasión fiscal en sectores de difícil fiscalización, así como mejorar la administración y recaudación del impuesto al concentrar esfuerzos en un sector de contribuyentes más reducido y susceptible de mayor control. Tomando en consideración que estos contribuyentes poseen una mayor capacidad administrativa y contable se propone que calculen, retengan y enteren ante las autoridades fiscales, el impuesto causado por dichas operaciones.--- Además, con el propósito de otorgar seguridad jurídica al contribuyente al que se le retuvo el IVA, se propone establecer expresamente que el retenedor lo sustituya en la obligación de pago y entero del impuesto.--- Asimismo, con el fin de evitar que con esta propuesta se produzca un incremento en las devoluciones de IVA, se pone a consideración de ese H Congreso facultar al Ejecutivo para autorizar una retención menor, aplicable por sector, en consideración a sus

características y la necesidad demostrada de recuperar con mayor oportunidad el impuesto acreditable."

Como se advierte, el establecimiento del sistema de retención del impuesto al valor agregado tuvo como finalidad primordial efficientar el mecanismo de traslación y retención del impuesto de ese tributo, con el fin de evitar la evasión que se presenta cuando el traslado se realiza por contribuyentes que en razón de su disminuida capacidad contable y administrativa, y por el escaso control que el Estado puede tener sobre los mismos, no cumplen cabalmente con ese procedimiento y con el entero respectivo, afectando gravemente el sistema de recaudación de esa contribución.

Por tanto, la circunstancia de que el sistema de retención se haya establecido respecto del impuesto que es trasladado por personas físicas a personas morales y no para el caso en que cualquiera de estas dos especies de entes trasladan el tributo a personas físicas, no constituye un trato inequitativo, sino una regulación que establece obligaciones diversas para sujetos que se encuentran jurídica y fácticamente en situaciones desiguales, ya que atendiendo a la mayor capacidad contable y administrativa de las personas jurídico colectivas y al mayor grado de control que el Estado tiene sobre éstas, resulta conveniente que las mismas retengan el impuesto que una persona física les traslada al prestarles un servicio independiente, destacando que esas circunstancias de hecho y de derecho no acontecen cuando el servicio se presta a una persona física, dado que por lo general



Estos no tienen la misma capacidad contable y administrativa, y el grado de control que tiene el Estado sobre las mismas es inferior.

En esos términos no afecta la equidad de la regulación en comento el que se establezca un trato desigual, en cuanto al traslado y retención del tributo, a dos personas físicas que realizan el mismo hecho imponible, con la diferencia de que una de ellas otorgue el uso y goce de un bien a favor de una persona de su misma naturaleza y la otra a una persona jurídico colectiva, pues esta circunstancia tiene consecuencias jurídicas y fácticas que en relación con la regulación del traslado y acreditamiento del impuesto al valor agregado, las ubica en un plano diferente que justifica un trato desigual.

Similares consideraciones fueron sustentadas por esta Segunda Sala, al resolver, en sesiones de veintisiete de abril y once de mayo de dos mil uno, los amparos en revisión 1790/99, 970/99, 738/2000 y 31/2000, promovidos por José Lee Hidalgo, Othón Ruiz Montemayor, Ernesto Pérez Charles y Lizzeth Zablah María, respectivamente, asuntos en los que se determinó que el artículo 1º-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, no viola el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, constitucional.

Resultan aplicables en la especie en las tesis aisladas números 26/CLIX/2001 y CLX/2001, publicadas en el Semanario

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Agosto de 2001, páginas 250 y 251, cuyos rubros y textos son:

***"VALOR AGREGADO. EL SISTEMA DE RETENCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 1o. y 1o.-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, EN TANTO QUE OTORGA UN TRATO DESIGUAL A CATEGORÍAS DE SUJETOS QUE SE ENCUENTRAN EN UNA SITUACIÓN DISPAR RESPECTO DEL MECANISMO DE TRASLADO Y ACREDITAMIENTO DE ESE TRIBUTO, RESPETA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. De conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 1o.-A, las personas morales que reciban el traslado del impuesto al valor agregado deben retener el monto respectivo si el hecho imponible consiste, entre otros supuestos, en la prestación de servicios personales independientes o en el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes por parte de personas físicas. Ahora bien, la circunstancia de que en estas hipótesis el sistema de retención provoque un trato desigual para las personas físicas que realizan el mismo hecho imponible, dependiendo de que el servicio o el uso o goce temporal se preste o se conceda en favor de una persona moral o de una persona física, no constituye una transgresión al principio tributario de equidad previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."***

**SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FALLO**



Mexicanos, pues como el mencionado sistema no guarda relación con las normas que establecen la conducta gravable, su momento de causación, y el procedimiento para determinar la base relativa o las diversas tasas aplicables, sino que se insertan dentro del mecanismo que rige el traslado y acreditamiento del tributo señalado, debe estimarse que el trato dispar se encuentra plenamente justificado, ya que mediante él no se modifica la afectación patrimonial que genera este mecanismo y, en cambio, sí se atiende a circunstancias que trascienden a su funcionamiento, en tanto que con ello se crean obligaciones diversas para sujetos que se encuentran jurídica y fácticamente en situaciones desiguales, en virtud de que, por lo general, las personas físicas, en relación con las morales, gozan de una menor capacidad contable y administrativa, y el grado de control que tiene el Estado sobre ellas es inferior, lo que ha provocado que aquéllas no cumplan cabalmente con el mencionado mecanismo, enterando el impuesto trasladado, lo que afecta gravemente el sistema de recaudación de esa contribución."

"VALOR AGREGADO. EL SISTEMA DE RETENCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 1o. Y 1o.-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO MODIFICA LA AFECTACIÓN PATRIMONIAL QUE EL REFERIDO TRIBUTO GENERA A LOS

**CONTRIBUYENTES QUE EN EL PERIODO RESPECTIVO TIENEN UN SALDO A CARGO, POR LO QUE PARA ABORDAR EL ESTUDIO DE SU EQUIDAD RESULTA IRRELEVANTE CUÁL ES EL HECHO IMPONIBLE QUE AQUÉLLOS REALIZAN.**

**Conforme a lo dispuesto en los citados preceptos, las personas morales que reciban el traslado del impuesto al valor agregado deben retener el monto respectivo si el hecho imponible consiste, entre otros supuestos, en la prestación de servicios personales independientes o en el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes por parte de personas físicas, por lo que los contribuyentes respectivos, al aplicar las diversas normas que rigen el mecanismo de traslado y acreditamiento de ese tributo, aunque materialmente no realicen el traslado correspondiente, jurídicamente sí lo considerarán y, además, al final del periodo correspondiente disminuirán del impuesto a su cargo el que se les hubiere retenido. Ahora bien, del análisis de ese sistema de retención se advierte que aun cuando el mismo trasciende al funcionamiento del referido mecanismo, no alcanza a modificar la afectación que éste genera al patrimonio de los causantes, pues si bien los sujetos que resientan la retención no tendrán bajo su dominio el impuesto jurídicamente trasladado, al final del respectivo periodo de tributación, considerando el impuesto acreditable que**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SUPREMA C  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



hubiere repercutido y el que hubieren trasladado, podrán disminuir del tributo a su cargo el monto retenido, con lo que será menor la cuantía a enterar o, incluso, se obtendrá un saldo a favor recuperable por el contribuyente, vía devolución o compensación; máxime que, legalmente, el patrimonio al que trasciende esta contribución de traslado obligatorio es al de los consumidores finales, ya que el monto que finalmente se entere al fisco proviene de éstos y no de los contribuyentes del impuesto al valor agregado. En ese tenor, para analizar si los referidos preceptos se apegan al principio tributario de equidad consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta irrelevante atender al hecho imponible que realizan los contribuyentes que resienten la retención, ya que las normas que regulan ésta no guardan relación con las que establecen la conducta gravable, <sup>en</sup> momento de causación, el procedimiento para determinar la base relativa o las diversas tasas aplicables, sino que se insertan dentro del mecanismo que rige el traslado y acreditamiento del tributo de referencia, sin modificar su afectación patrimonial, además de que tal justificación constitucional o la inconstitucionalidad del trato igual o desigual que se dé en las normas respectivas, no depende de los

TE DE  
ACION,  
SALA  
JERDOS.

**bienes, el otorgamiento del uso o goce temporal de éstos o la prestación de servicios personales independientes, por lo que para concluir sobre esa cuestión debe atenderse a las circunstancias jurídicas y fácticas que trascienden al funcionamiento del aludido mecanismo, como son la capacidad administrativa y contable de los contribuyentes y el grado de control que el Estado tenga sobre éstos".**

Una vez determinada la constitucionalidad del mecanismo que rige el traslado y acreditamiento del impuesto al valor agregado, previsto en el artículo 1º-A, fracción II, inciso a), toca analizar si el artículo 32, fracción III, último párrafo, de la propia Ley, cuya constitucionalidad se controvierte, transgrede, o no, la garantía de equidad tributaria tutelada en el artículo 31, fracción IV, constitucional, para lo cual conviene reproducir de nueva cuenta el dispositivo legal impugnado:

**"ARTÍCULO 32.- Los obligados al pago de este impuesto y las personas que realicen los actos o actividades a que se refiere el artículo 2o.-A tienen, además de las obligaciones señaladas en otros artículos de esta Ley, las siguientes:**

...

**III.- Expedir comprobantes señalando en los mismos, además de los requisitos que establezcan el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento, el impuesto al valor agregado que se traslada**

SECRETARÍA DE JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN



**expresamente y por separado a quien adquiera los bienes, los use o goce temporalmente o reciba los servicios. Dichos comprobantes deberán entregarse o enviarse a quien efectúa o deba efectuar la contraprestación, dentro de los 15 días siguientes a aquél en que se debió pagar el impuesto en los términos de los artículos 11, 17 y 22 de esta Ley.**

**Los contribuyentes a los que se retenga el impuesto deberán expedir comprobantes con la leyenda 'Impuesto retenido de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor Agregado.'**

...

Como se advierte, dicho numeral establece la obligación de los contribuyentes de expedir comprobantes de retención del impuesto al valor agregado con la leyenda: **"Impuesto retenido de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor Agregado."**, lo cual, contrario a lo afirmado por el recurrente, no constituye un trato inequitativo, ya que esa obligación es una consecuencia inherente al mecanismo de traslado del impuesto en tanto que la expedición de comprobantes complementa la retención del tributo en la medida que documenta dicha operación; luego, al ser constitucional el sistema de traslado y acreditamiento del impuesto al valor agregado, en vía de consecuencia, también lo es la expedición de los comprobantes a que se refiere el último párrafo de la fracción III, del artículo 32, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, porque forman parte de ese sistema.

RTE  
NA  
S  
JE

En otros términos, el hecho de que el precepto que ahora se analiza establezca para los contribuyentes del impuesto al valor agregado diversas obligaciones administrativas, entre otras, la de expedir comprobantes fiscales anotando que se retuvo ese tributo con apego a la Ley relativa, no significa que dicho impuesto sea inequitativo, ya que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal establece como obligación de los mexicanos, la de contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, incluso el cumplimiento de todas las disposiciones de carácter fiscal señaladas en la ley, con el objeto de que la autoridad pueda comprobar la correcta contribución al gasto público por parte de los contribuyentes, por lo que la circunstancia de que tales obligaciones administrativas no se encuentren previstas para los distintos contribuyentes, no es suficiente para estimar que la carga de expedir los comprobantes fiscales en cuestión, es inequitativa, dado que, como quedó precisado, el mecanismo que rige el traslado y acreditamiento establecido en el artículo 1º-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, respeta el principio de equidad tributaria, y por ende, también lo hace su acreditamiento mediante los comprobantes fiscales en cuestión.

En virtud de las razones vertidas con antelación, se impone, en lo que es materia de la revisión, competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, revocar el fallo recurrido y negar el amparo solicitado en relación con los artículos 1º-A, fracción III, inciso a) y 32, fracción III, último párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

UNIDO  
SUPREMA C  
JUSTICIA DEL  
1 JUN 1990  
SECRETARIA DE



Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

**PRIMERO.-** En la materia de la revisión, competencia de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se revoca la sentencia impugnada.

**SEGUNDO.-** La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Enrique Emilio Marcos Giacomán, respecto de los artículos 1º-A, fracción II, inciso a) y 32, fracción III, último párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por las razones expuestas en el último considerando de esta ejecutoria.

Notifíquese, con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al Juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores ministros: Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Presidente José Vicente Aguinaco Alemán. Fue ponente el tercero de los ministros antes mencionados.


Firman el Presidente, Ponente y el Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe.

PRESIDENTE:



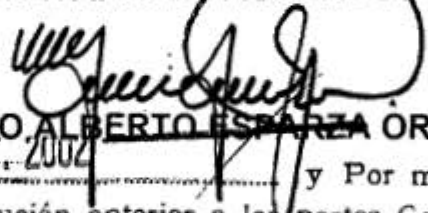
MINISTRO JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.

PONENTE:



MINISTRO SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS



LIC. MARIO ALBERTO ESPANZA ORTIZ.

En 31 OCT. 2002 y Por medio de lista se notificó la resolución anterior a las partes Conste

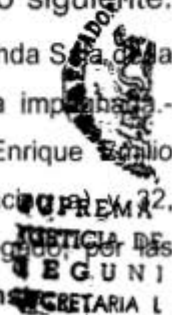
SIENDO LAS CATORCE HORAS DE LA FECHA ANTES INDICADA Y EN VIRTUD DE NO HABER COMPARECIDO LOS INTERESADOS POR NOTIFICACIONES SE TIENE POR HECHA DICHA NOTIFICACION POR MEDIO DE LISTA. DOY FE

Esta hoja forma parte del amparo en revisión 487/2001,

promovido por Enrique Emilio Marcos Giacomán. Fallado el día dieciocho de octubre del año dos mil dos en el sentido siguiente:

**PRIMERO.-** En la materia de la revisión, competencia de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se revoca la sentencia impugnada.

**SEGUNDO.-** La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Enrique Emilio Marcos Giacomán, respecto de los artículos 1º-A, fracción II, inciso 2º, fracción III, último párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por las razones expuestas en el último considerando de esta ejecutoria. Conste



El Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace constar que, en cumplimiento al artículo 191 de la Ley de Amparo, al terminar las labores de este día se fijó, en el lugar destinado para las notificaciones, una lista de los asuntos tratados en la audiencia de esta Sala celebrada el día de hoy, en la que se incluye este expediente (o toca) *Amparo en Revisión 487/2001*.

México, D. F., a dieciocho de octubre de dos mil dos.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SALA